


**CONTESTACION DEMANDA LUIS CARLOS SANCHEZ- RAD. 2023-00576**

Maria Elizabeth Zuñiga Abogados Consultores S.A.S <mzuniga.abogados@gmail.com>

Mar 13/02/2024 8:54

Para: Juzgado 04 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j04lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: notificacionesjudiciales <notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co>; Sol Angelica <procesos@tiradoescobar.com>; Buzon ProcesosJudiciales <procesosjudiciales@colfondos.com.co>

 2 archivos adjuntos (1 MB)

CONTESTACION DEMANDA, DEMANDA DE RECONVENCION Y PRUEBA DOCUMENTAL LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO.pdf;  
PODER, CERTIFICADO CAMARA Y TARJETA PROFESIONAL.pdf;

Señores

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali

E. S. D.

Reciba cordial y respetuoso saludo.

Maria Elizabeth Zúñiga, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 41.599.079 y T.P. 64.937 del C.S. de la J., en calidad de apoderada de PROTECCIÓN, habiéndome notificado de la demanda del proceso de la referencia me permito acompañar la respectiva contestación, con su prueba documental y demanda de reconvención, así como también copia de mi tarjeta profesional y poder a mí conferido contenido en la Escritura Pública No. 1017 del 19 de septiembre de 2022, conforme a lo dispuesto en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 reglamentado por la Ley 2213 de 2022, mediante la cual se establece la vigencia permanente del Decreto antes mencionado.

Igualmente copia de este correo se envía a la parte actora y a los vinculados dentro del proceso.

Quedamos atentas a la confirmación del recibido

De ustedes, muy respetuosamente,

**Maria Elizabeth Zuñiga**

*Abogados Consultores S.A.S.*

Recibo No. 8807384, Valor: \$7.200

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823KQ5JCB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

#### **NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES SAS  
Nit.: 901258137-7  
Domicilio principal: Cali

#### **MATRÍCULA**

Matrícula No.: 1042149-16  
Fecha de matrícula en esta Cámara: 21 de febrero de 2019  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022  
Grupo NIIF: Grupo 3

#### **UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: KR 5 # 10 - 63 OF 718  
Municipio: Cali - Valle  
Correo electrónico: mariaezu@gmail.com  
Teléfono comercial 1: 3104580010  
Teléfono comercial 2: 8806340  
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: KR 5 # 10 - 63 OF 718  
Municipio: Cali - Valle  
Correo electrónico de notificación: mariaezu@gmail.com  
Teléfono para notificación 1: 3104580010  
Teléfono para notificación 2: 8806340  
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES SAS SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 8807384, Valor: \$7.200

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823KQ5JCB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

### CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 30 de enero de 2019 de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de febrero de 2019 con el No. 2933 del Libro IX, se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES SAS

### TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: INDEFINIDA

### OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA EMPRESA TENDRÁ POR OBJETO PRINCIPAL LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TODAS LAS RAMAS DEL DERECHO, SERVICIOS QUE INCLUYEN ASESORÍA JURÍDICA, CONDUCCIÓN DE PROCESOS LITIGIOSOS O DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, TRÁMITES DE TODA NATURALEZA ANTE TODAS LAS JURISDICCIONES DEL DERECHO, ESPECIALMENTE EN EL ÁREA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL. REPRESENTACIÓN DE EMPRESAS ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. A TAL EFECTO, PODRÁ REALIZAR TODA CLASE DE NEGOCIOS JURÍDICOS, PODRÁ ASOCIARSE CON OTRAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, PROFESIONALES, SOCIEDADES O FIRMAS DE PROFESIONALES, SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS, DE OBJETO SIMILAR.

DICHAS ACTIVIDADES PODRÁ LLEVARLAS A CABO DIRECTA O INDIRECTAMENTE MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES DE OBJETO IDÉNTICO O ANÁLOGO, ALIANZAS ESTRATÉGICAS O MEDIANTE CUALQUIER OTRO MEDIO LEGAL.

LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL MISMO.

### CAPITAL

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
|                  | <b>*CAPITAL AUTORIZADO*</b> |
| Valor:           | \$20,000,000                |
| No. de acciones: | 20,000                      |
| Valor nominal:   | \$1,000,000                 |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
|                  | <b>*CAPITAL SUSCRITO*</b> |
| Valor:           | \$2,500,000               |
| No. de acciones: | 2,500                     |
| Valor nominal:   | \$1,000,000               |

|        |                         |
|--------|-------------------------|
|        | <b>*CAPITAL PAGADO*</b> |
| Valor: | \$2,500,000             |

Recibo No. 8807384, Valor: \$7.200

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823KQ5JCB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de acciones: 2,500  
Valor nominal: \$1,000,000

### REPRESENTACIÓN LEGAL

GERENTE GENERAL.-LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE DESIGNADO PARA UN TÉRMINO INDEFINIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON UN PRIMERO Y SEGUNDO SUPLENTE QUE REEMPLAZARÁN AL PRINCIPAL, EN SUS FALLAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. EL GERENTE DE LA SOCIEDAD ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA PARA TODOS LOS EFECTOS.

EL GERENTE PODRÁ SER REMOVIDO LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO.

### FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FUNCIONES.- EL GERENTE DE LA SOCIEDAD EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: (I) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL; (U) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS, SIN LÍMITE EN LA CUANTÍA. (III) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; (IV) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD; (Y) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS; (VI) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD; (VI) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; (VIII) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL; (IX) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS INFORMES QUE ORDENE LA LEY Y QUE LA MISMA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LE SOLICITE; (X) CUMPLIR Ç HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS ESTATUARIAS Y LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

ASÍ MISMO, EL GERENTE SERÁ EL ENCARGADO DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA ADMINISTRADORA CUANDO ÉSTA ACTÚE COMO FIDEICOMITENTE Y/O BENEFICIARIA DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS O ENCARGOS FIDUCIARIOS.

PARÁGRAFO. EL GERENTE DEBERÁ RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS AL FINAL DE CADA AÑO Y CUANDO SE RETIRE DE SU CARGO.

Recibo No. 8807384, Valor: \$7.200

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823KQ5JCB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

### NOMBRAMIENTOS

#### REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 30 de enero de 2019, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de febrero de 2019 con el No. 2933 del Libro IX, se designó a:

| CARGO                         | NOMBRE                           | IDENTIFICACIÓN |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL | MARIA ELIZABETH ZUÑIGA DE MUNERA | C.C.41599079   |
| PRIMER SUPLENTE               | LUZ ADRIANA VIDAL VELEZ          | C.C.1130591920 |
| SEGUNDO SUPLENTE              | DILMA LINETH PATIÑO IPUS         | C.C.1061370120 |

#### RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

#### SITUACIÓN(ES) DE CONTROL- GRUPO EMPRESARIAL

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ENERO DE 2019  
INSCRIPCIÓN: 21 DE FEBRERO DE 2019 NRO. 2934 DEL LIBRO IX

CONSTA LA SITUACIÓN DE CONTROL:

CONTROLANTE: MARIA ELIZABETH ZUÑIGA DE MUNERA  
C.C. 41599079  
DOMICILIO: SANTIAGO DE CALI  
NACIONALIDAD: COLOMBIANA

Recibo No. 8807384, Valor: \$7.200

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823KQ5JCB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TODAS LAS RAMAS DEL DERECHO.

SUBORDINADA: MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES SAS

NIT: 901258137 - 7

DOMICILIO: SANTIAGO DE CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TODAS LAS RAMAS DEL DERECHO.

PRESUPUESTO DE CONTROL: PROPIEDAD DEL 100% DE LAS ACCIONES QUE COMPONEN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 261 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

#### CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6910

#### TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: MICRO

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$497,849,891

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:6910

\*\*\*\*\*

#### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

Recibo No. 8807384, Valor: \$7.200

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823KQ5JCB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.



**Ana M. Lengua B.**

# República de Colombia

1



MIO

ESCRITURA PUBLICA NÚMERO: MIL DIECISIETE (1017)-----

FECHA: DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2022.-----

PODER ESPECIAL.-----

DE: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS  
PROTECCIÓN S.A.-----

A: MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES S.A.S.-----

REVOCATORIA DE PODER.-----

DE: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS  
PROTECCIÓN S.A.-----

A: MARIA ELIZABETH ZUÑIGA DE MÚNERA.-----

**NOTARIA CATORCE DE MEDELLÍN.**

\*\*\*\*\*

En el Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a los diecinueve (19) día de septiembre del año dos mil veintidós (2022), al despacho de la **NOTARÍA CATORCE DEL CÍRCULO DE MEDELLÍN**, cuya Notaria Encargada es la Doctora **VANESSA MONTOYA LONDOÑO**, se otorgó escritura pública contenida en los siguientes términos:-----

## 1. PODER ESPECIAL-----

Compareció **JUAN PABLO ARANGO BOTERO**, mayor de edad, domiciliado en Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.545.420 y manifestó:-----

**PRIMERO:** Que actúa como representante legal, en su calidad de Vicepresidente Jurídico y Secretario General de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, sociedad comercial con domicilio principal en la ciudad de Medellín, constituida mediante escritura pública número tres mil cien (3100), del doce (12) de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991), otorgada en la Notaría Once de Medellín, según consta en certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que se adjunta para que sea protocolizado con la presente escritura.-----

**SEGUNDO:** Que en el carácter indicado y con fundamento en las facultades estatutarias correspondientes, confiere poder especial a la sociedad denominada **MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES S.A.S.** con domicilio en la ciudad de Cali y con NIT. 901-258-137-7 representada legalmente por **MARIA**-----

PO009011543

NOTARIO ENCARGADO

NOTARIO ENCARGADO

14-01-22 PO009011543

22-07-22 PO059304951

THOMAS GREG & SONS

THOMAS GREG & SONS



**ELIZABETH ZÚÑIGA DE MÚNERA** identificada con la **C.C. 41.599.079** y cuyo objeto social principal es la prestación de servicios jurídicos, para que en su calidad de **APODERADO JUDICIAL DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, PROTECCIÓN S.A.** y por intermedio de sus abogados inscritos en el Certificado de Existencia y Representación Legal, asistan y actúen en representación de **PROTECCION S.A.** y que en virtud de ello realicen las siguientes funciones:-----

A. Representar a la Compañía en las acciones judiciales o administrativas que deba adelantar o que se adelanten en su contra. En desarrollo de esta facultad podrá: --

1) Notificarse de todas las providencias judiciales o administrativas. -----

2) Presentar y contestar demandas en las que actúe como parte **PROTECCIÓN S.A.**, asistir a audiencias, absolver interrogatorios de parte, confesar, recibir, comprometer, conciliar y transigir. -----

B. Representar a **PROTECCIÓN S.A.** en los trámites de concordatos y/o liquidaciones obligatorias. Conciliar en procesos concordatarios, liquidatarios, de reestructuración y similares, en que se requiera de la intervención de un representante de **PROTECCIÓN S.A.** para conciliar. -----

C. Representar a **PROTECCIÓN S.A.** en los trámites de cualquier naturaleza que se deban adelantar ante entidades públicas y privadas. -----

D. Igualmente representar a **PROTECCIÓN S.A.** en las gestiones que deba adelantar ante las entidades públicas y privadas tendiente a obtener el pago de las acreencias.

E. Suscribir y aprobar en nombre de **PROTECCIÓN S.A.** acuerdos de pago con deudores. -----

F. Designar a cualquiera de los abogados inscritos a **MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES S.A.S.**, las funciones antes descritas para la adecuada representación de **PROTECCIÓN S.A.**, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código General del Proceso. -----

G. Las demás actuaciones que se requieran, de manera que **PROTECCIÓN S.A.** se encuentre siempre debidamente representado en los asuntos de que trata el presente poder. -----

**TERCERO:** Que este poder tendrá vigencia mientras que **MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES S.A.S.** tenga el carácter de Apoderado Judicial de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías **PROTECCIÓN S.A.**

Pasa a la hoja Nro. **PO009011544** -----



Viene de la hoja Nro. PO009011543 Escritura 1017 de septiembre 19 de 2022. -----

## 2. REVOCATORIA DE PODER. -----

Comparece nuevamente **JUAN PABLO ARANGO BOTERO**, mayor de edad, domiciliado en Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.545.420 y manifestó: -----

**PRIMERO:** Que actúa como representante legal, en su calidad de Vicepresidente Jurídico y Secretario General de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, sociedad comercial con domicilio principal en la ciudad de Medellín, constituida mediante escritura pública número tres mil cien (3100), del doce (12) de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991), otorgada en la Notaría Once de Medellín, según consta en certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que se adjunta para que sea protocolizado con la presente escritura. -----

**SEGUNDO:** Que en el carácter indicado, **REVOCA** el PODER ESPECIAL conferido a **MARIA ELIZABETH ZÚNIGA DE MÚNERA** identificada con cédula de ciudadanía **41.599.079**, mediante la Escritura Pública Número 509 del veinticinco (25) de mayo del año 2017 de la Notaría 14 de Medellín. -----

## **HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA POR CORREO ELECTRÓNICO.** -----

Se advirtió al otorgante de esta escritura de la obligación de leer la totalidad de su texto, a fin de verificar la exactitud de todos los datos en ella consignados, con el fin de aclarar, modificar o corregir lo que les pareciere; la firma de la misma demuestra su aprobación total del texto. En consecuencia, la notaría no asume ninguna responsabilidad por errores o inexactitudes establecidas con posterioridad a la firma del otorgante y de la notaria. En tal caso, éstos deben ser corregidos mediante el otorgamiento de una nueva escritura, suscrita por todos los que intervinieron en la inicial y sufragada por los mismos (art. 35 Decreto Ley 960/70). -----

**ACEPTACIÓN:** El compareciente leyó el presente instrumento, lo aprobó y firma en constancia, siendo advertido de la formalidad del registro en la Cámara de Comercio. -----

**PROTOCOLIZACIÓN:** Con el presente instrumento se protocolizan los siguientes: ---  
- Certificado de Existencia y Representación Legal de **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** expedido por la Superfinanciera. -----

PO009011544

NOTARÍA ENCARGADA

NOTARÍA ENCARGADA

14-01-22 PO009011544

22-07-22 PC059304650

THOMAS GREG & BONS

XY4616040404PT

THOMAS GREG & BONS

- Certificado de Existencia y Representación Legal de MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. expedido por la Cámara de Comercio de Cali.

El compareciente leyó el presente instrumento, lo aprobó y firma en constancia, siendo advertido de la formalidad del registro en la Cámara de Comercio. -----

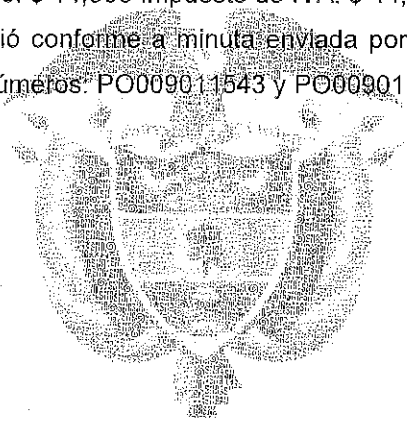
La notaría autorizó al representante legal de la sociedad otorgante para firmar esta escritura fuera del despacho. Artículo 12 del Decreto 2148 de 1983. -----

**Notificaciones electrónicas.** - Los comparecientes aceptan que se realicen las notificaciones electrónicas pertinentes al presente acto de conformidad con el Artículo 56 de la ley 1437 de 2011. -----

Derechos notariales: \$ 132,400 Resolución 00755 de 2022 SNR. -----

Superintendencia y Fondo: \$ 14,300 Impuesto de IVA: \$ 44,631. -----

Esta escritura se extendió conforme a minuta enviada por correo electrónico en las hojas de papel notarial números: PO009011543 y PO009011544. /-----



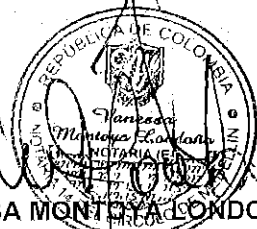
  
JUAN PABLO ARANGO BOTERO

C.C. 98.545.420

REPRESENTANTE LEGAL

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

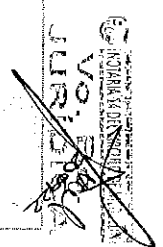
NIT: NIT: 800138188-1



  
VANESSA MONTAÑA LONDOÑO

NOTARIA CATORCE DEL CIRCULO DE MEDELLÍN (E)

RESOLUCION 11106 DE 16-09-2022 SNR





Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 12/09/2022 05:57:20 pm



Recibo No. 8675304, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822J85GLZ

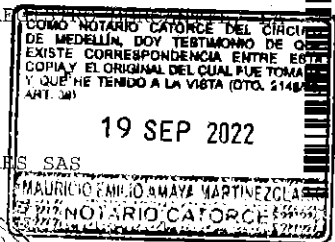
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 8861300 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB [WWW.CCC.ORG.CO](http://WWW.CCC.ORG.CO).

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES SAS  
NIT.: 901258137-7  
Domicilio principal: Cali



MATRÍCULA

Matrícula No.: 1042149-16  
Fecha de matrícula en esta Cámara: 21 de febrero de 2022  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022  
Grupo NIF: 3



UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: KR 5 # 10 - 63 OF 718  
Municipio: Cali - Valle  
Correo electrónico: mariaezu@gmail.com  
Teléfono comercial 1: 3104580010  
Teléfono comercial 2: 8806340  
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: KR 5 # 10 - 63 OF 718  
Municipio: Cali - Valle  
Correo electrónico de notificación: mariaezu@gmail.com  
Teléfono para notificación 1: 3104580010  
Teléfono para notificación 2: 8806340  
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES SAS SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PC059304649

NOTARIO ENCARGADO

22-07-22 PC059304649

IAKSTMRS3

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 8280114084450740

Generado el 01 de agosto de 2022 a las 08:30:13

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

administración general de la sociedad. b) De uno o más Vicepresidentes y que serán, nombrados por la JUNTA DIRECTIVA en cualquier tiempo, y para los cuales dicho órgano en el acto de nombramiento determinará si ostentán la calidad de Representante Legal de la Sociedad. c) De uno o más Gerentes Regionales, que serán nombrados por el PRESIDENTE en cualquier tiempo y ejercerán la Representación Legal de la Sociedad en cuanto a los negocios propios de sus oficinas y de acuerdo con la delegación de funciones que les confiera el PRESIDENTE o alguno de los Vicepresidentes con Representación Legal. Los Gerentes Regionales tendrán también la representación Legal de la Sociedad para atender en su nombre las audiencias de conciliación y tendrán bajo su responsabilidad administrativa una, o más sucursales, agencias u oficinas. Corresponde al PRESIDENTE determinar el territorio en el cual ejercerán su jurisdicción y las Sucursales, agencias, u oficinas que quedarán bajo su dependencia administrativa. d) De uno o más Gerentes de Sucursal, agencia u oficina, que serán nombrados por el PRESIDENTE y ejercerán la representación legal de la sociedad en cuanto a los negocios propios de su oficina y de acuerdo con la delegación de funciones que les confiera el PRESIDENTE o alguno de los Vicepresidentes con Representación Legal. PARAGRAFO 1º Para efectos de la Representación Legal Judicial de la Sociedad, tendrán igualmente la calidad de Representantes Legales judiciales el Director COMO NOTARIO, GABRIEL DEL CARMEN CUBRO JURIDICO, quienes representarán a la sociedad ante las autoridades jurisdiccionales, DE MEDELLIN, DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE LAS ENTIDADES CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO Igualmente, serán EXISTE CONCILIACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, para los exclusivos efectos de representar a la Sociedad en las Audiencias de Conciliación judiciales o extrajudiciales, para absolver interrogatorios de parte, para recibir notificaciones, tanto ante autoridades jurisdiccionales, administrativas, políticas, entidades centralizadas y descentralizadas del Estado, los abogados u otras personas que con tal fin designe la JUNTA DIRECTIVA. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Son funciones del PRESIDENTE: 1. Representar legalmente la Sociedad y tener a su cargo la administración general de sus negocios. 2. Celebrar en nombre de la Sociedad todos los contratos que tengan por objeto social. 3. Ejecutar y hacer cumplir las decisiones de la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS con su objeto social. 4. Nombrar y remover libremente los empleados de sus dependencias, así como a los demás que le corresponda nombrar y remover en ejercicio de la delegación de funciones que pueda hacerle la JUNTA DIRECTIVA. 5. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que considere necesarios para representar a la Sociedad. 6. Adoptar las medidas necesarias para la debida conservación de los bienes sociales y para el adecuado recaudo y aplicación de sus fondos, vigilar y dirigir las actividades de los empleados de la Sociedad e impartir las ordenes e instrucciones que exija la buena marcha de la empresa. 7. Citar a la JUNTA DIRECTIVA cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre las marcha de los negocios sociales; someter a consideración los balances de prueba y suministrarle todos los informes que ella le solicite en relación con la Sociedad y con sus actividades. 8. Presentar a la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS anualmente en su Reunión Ordinaria, el balance de fin de ejercicio junto con los informes y proyecto de distribución y demás detalles e informaciones especiales exigidos por la Ley, previo el estudio, consideraciones y aprobación inicial de la JUNTA DIRECTIVA. El informe contendrá además una descripción de los riesgos inherentes a las actividades relacionadas con la Sociedad y demás aspectos relativos a su operación de conformidad con las normas vigentes. 9. Cumplir, hacer cumplir y difundir adecuadamente el Código de Buen Gobierno de la Sociedad y 10. Las demás que le corresponde de acuerdo con la Ley. FACULTADES: La Representación Legal de la Sociedad corresponde a las personas enunciadas en el Artículo 48 de estos estatutos, quien en los términos de esa disposición podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan el carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que la Sociedad persigue y los que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la Sociedad. Las operaciones, actos y contratos de que trata este artículo no tendrán limitación alguna. (Escritura Pública 415 del 04 de mayo de 2017 Notaría 14 de Medellín)

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

| NOMBRE   | IDENTIFICACIÓN | CARGO                    |
|--|----------------|--------------------------|
| Juan David Correa Solórzano<br>Fecha de inicio del cargo: 05/05/2016 | CC - 98542022  | Presidente               |
| Maria Claudia Rey Castillo<br>Fecha de inicio del cargo: 28/01/2021  | CC - 51985303  | Vicepresidente Comercial |





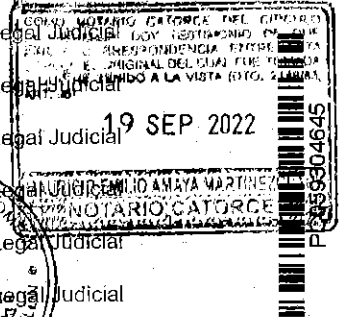
# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 8280114084450740

Generado el 01 de agosto de 2022 a las 08:30:13

## ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

| NOMBRE  | IDENTIFICACIÓN  | CARGO  |
|---|-----------------|--|
| Patricia Restrepo Gutiérrez<br>Fecha de inicio del cargo: 18/09/2014  | CC - 42825614   | Vicepresidente de Riesgos  |
| Juan Pablo Arango Botero<br>Fecha de inicio del cargo: 12/03/2020     | CC - 98545420   | Vicepresidente Jurídico y<br>Secretario General                    |
| Felipe Andres Herrera Rojas<br>Fecha de inicio del cargo: 12/01/2017  | CC - 15515499   | Representante Legal en Calidad<br>de Vicepresidente de Inversiones |
| David Acosta Baena<br>Fecha de inicio del cargo: 09/03/2022           | CC - 1037615180 | Representante Legal Judicial                                       |
| Natalia Rengifo Cadavid<br>Fecha de inicio del cargo: 09/03/2022      | CC - 1152438614 | Representante Legal Judicial                                       |
| Daniel Giraldo Giraldo<br>Fecha de inicio del cargo: 11/12/2019       | CC - 1037581063 | Representante Legal Judicial                                       |
| Adriana Lucia Mejía Turizo<br>Fecha de inicio del cargo: 22/06/2015   | CC - 43985699   | Representante Legal Judicial                                       |
| Maria Carolina Peñuela Pérez<br>Fecha de inicio del cargo: 22/06/2015 | CC - 43971629   | Representante Legal Judicial                                       |
| Juliana Montoya Escobar<br>Fecha de inicio del cargo: 22/06/2015      | CC - 39176497   | Representante Legal Judicial                                       |
| Zoé Isaza Restrepo<br>Fecha de inicio del cargo: 13/07/2016           | CC - 30685753   | Representante Legal Judicial                                       |
| Pablo Mauricio Ferrer Henao<br>Fecha de inicio del cargo: 26/03/2020  | CC - 71722470   | Vicepresidente de Tecnología y<br>Servicios a los Clientes         |



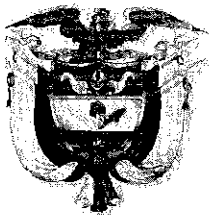
**JOSUÉ OSWALDO BERNAL CAVIEDES**  
**SECRETARIO GENERAL**

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)



El emprendimiento  
es de todos



# NOTARIA CATORCE DEL CIRCULO DE MEDELLIN

*Dr. Mauricio Emilio Amaya Martinez Clark*

NIT8.670.060-5

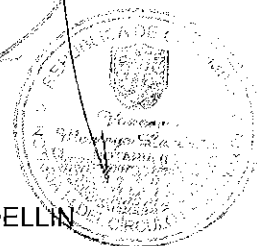
Escritura Publica Nro. **1017**

ES **Segunda** COPIA EN REPRODUCCION MECANICA  
DE SU ORIGINAL DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO **1017**  
DE FECHA **19 de septiembre de 2022**  
QUE SE EXPIDE EN **7** HOJAS DE PAPEL AUTORIZADO.  
ARTICULO 1 DEL DECRETO 188 DEL 12 DE FEBRERO DE 2013

CON DESTINO A: **CAMARA DE COMERCIO**  
SE EXPIDE EN MEDELLIN A LOS VEINTE (20) DÍAS DEL MES DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022)

  
**VANESSA MONTOYA LONDOÑO**

NOTARIA (E) CATORCE DEL CIRCULO DE MEDELLIN



NUMERACION DE LAS HOJAS DE PAPEL NOTARIAL DE COPIAS UTILIZADO:

PC059304645, PC059304646, PC059304647, PC059304648, PC059304649, PC059304650, PC059304651

*Notaría*  
*de Medellín* **14**

**MAURICIO EMILIO AMAYA MARTÍNEZ**  
**NIT. 8.670.060-5**

Calle 49B Nro. 64B-61 Medellín - PBX: 260 30 62  
e-mail: [notaria14@hotmail.com](mailto:notaria14@hotmail.com)

147294 REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

64937

Tarjeta No.

93/08/03

Fecha de  
Expedición

93/03/12

Fecha de  
Grado

MARIA ELIZABETH  
ZUÑIGA DE MUNERA

41599079

Cédula

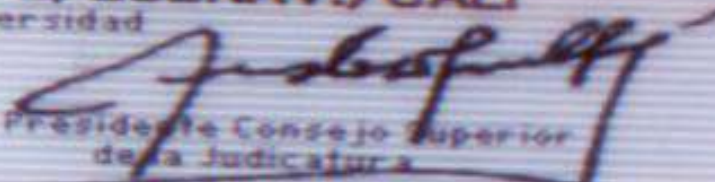
DEL VALLE

Consejo Seccional

DE S/BUENAV./CALI

Universidad



  
Presidente Consejo Superior  
de la Judicatura

*Maria Elizabeth Zuñiga de Munera*



Santiago de Cali, 12 de febrero de 2024

**Señor**  
**JUEZ CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI**  
**E. S. D.**

**Referencia: PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**  
**DEMANDANTE: LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**  
**DEMANDADO: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y**  
**CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., Y COLPENSIONES**  
**RADICACION: 2023-00576**  
**ASUNTO: CONTESTACION DEMANDA**

**María Elizabeth Zúñiga**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 41.599.079 de Bogotá, abogada, con T.P. 64.937 del Consejo Superior de la Judicatura, haciendo uso del poder conferido por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías **PROTECCIÓN S.A.**, y habiéndome notificado por conducta concluyente, procedo a dar contestación a la demanda ordinaria laboral del proceso de la referencia, en los siguientes términos:

#### **A LAS PRETENSIONES**

Nos oponemos a la prosperidad de las pretensiones perseguidas en contra de mí representada, solicitando desde ya se absuelva a **PROTECCIÓN S.A.** de la misma, pronunciándonos expresamente sobre cada una de las peticiones del escrito de demanda, en la forma en que fueron planteadas, así:

**A LA PRIMERA:** Nos oponemos a esta pretensión porque la afiliación se realizó con el lleno de los requisitos y formalidades legales y por ende la selección del régimen, la realizó el demandante de forma libre, espontánea y sin presiones y en las oportunidades legales no manifestó su deseo de retractarse de la misma, tal como lo demostraremos en el curso del proceso.

Igualmente nos oponemos a esta pretensión porque si al momento de afiliarse la parte actora al RAIS se cumplió con los requisitos vigentes en la normatividad legal, mal podría exigirse el cumplimiento de otros sino estaban establecidos en la Ley.

Y al respecto es muy importante recordar que el deber de información no nace con la llamada línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en materia de nulidad o ineficacia de la afiliación. Ese deber de información tiene desarrollo normativo en los Decreto 720 1994, Decreto 656 de 1994, Estatuto financiero anterior a la Ley 100 y el Decreto 663 de 1993, Ley 1328 de 2009, Decreto 2555 de 2010, Ley 1748 de 2014, Circular 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera.

Tal deber no ha sido estático, ha evolucionado. i) Inicialmente el Decreto 692 de 1994 señalaba que

la constancia de la voluntad de afiliación era el formulario de afiliación con la correspondiente leyenda pre-impresa ii) La circular 019 de 1998 reitera esa reglamentación, indicando que la constancia de la voluntad era el formulario de afiliación con la consignación de que la selección era libre y voluntaria iii) A partir del Decreto 2555 de 2010 y de la Ley 1748 de 2014, se han establecido unos criterios para la asesoría que deben dar las AFP's, como lo son: la obligatoriedad de realizar proyecciones financieras cuando así se solicite, la obligatoriedad de doble asesoría para el traslado de régimen y la remisión de extractos financieros detallados y comprensibles iv) La Circular 016 de 2016 regula la reasesoría frente a los afiliados que están llegando a la edad del límite decenal de retorno. Por ello, ese deber de información es aplicable de manera general a cualquier afiliado y es inherente a la actividad de las AFP's.

Atendiendo la normatividad legal vigente para la época en que el demandante ejerció de manera libre y voluntaria su derecho de movilidad entre los regímenes pensionales existentes en Colombia, ha de resaltarse que no se exigía legalmente para ninguna Administradora de Fondos de Pensiones, el suministrar por escrito ningún tipo de cálculo financiero o proyección actuarial al potencial afiliado, y tampoco se exigía dejar por escrito el soporte de haber recibido la asesoría pensional; pues el proceso de asesoría era básicamente verbal; sólo hasta el año 2014, con la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015, surgió la obligación para las administradoras de fondos de pensiones de poner a “disposición de sus afiliados herramientas financieras que les permitan conocer las consecuencias de su traslado”, tal y como lo señala la Superintendencia Financiera de Colombia en concepto No. 2015123910-002 del 29 de diciembre de 2015.

De otro lado, tampoco es factible que se declare la nulidad o ineficacia del traslado por cuanto el demandante tiene la calidad de pensionado y al respecto la reciente sentencia SL 373 de 2021 con ponencia de la Magistrada doctora Gloria Cecilia Dueñas, de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en un asunto de pensionado bajo la modalidad de retiro programado, sostiene:

*“Esta circunstancia conduce a la Corte a interrogarse si es posible, bajo el manto de la ineficacia de la afiliación, que el demandante pensionado del régimen de ahorro individual con solidaridad, vuelva al mismo estado en el que se encontraba antes de su traslado al RPMPD.*

*Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante), lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un status jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relación es jurídicas y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones.*

*Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que reversar esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el capital habría perdido su integridad y,*

*por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública.*

*Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata.*

*Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AF. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de las opciones pensionales intervienen en la administración y gestión del riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado.*

*Por lo tanto, no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida.*

*Si se trata de una garantía de pensión mínima, volver las cosas a su estado anterior, implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía. Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requería la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defienda los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono.*

*Ni que decir cuando el capital se ha desfinanciado, especialmente cuando el afiliado decide pensionarse anticipadamente, o de aquellos casos en que ha optado por los excedentes de libre disponibilidad (art. 85 de la Ley 100 de 1993), en virtud de los cuales recibe la devolución de una parte de su capital ahorrado. En esta hipótesis, los recursos, ya desgastados, inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.*

*La Corte podrá discurrir y profundizar en muchas más situaciones problemáticas que generaría la invalidación del estado de pensionado. No obstante, considera que los ejemplos citados son suficientes para demostrar el argumento según el cual la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones.*

...

***Finalmente, de acuerdo con lo expuesto, la Corte abandona el criterio sentado en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado.*** (El resaltado es mío).

**A LA SEGUNDA:** Nos oponemos a esta pretensión porque la afiliación se realizó con el lleno de los requisitos y formalidades legales y por ende la selección del régimen, la realizó el demandante de forma libre, espontánea y sin presiones y en las oportunidades legales no manifestó su deseo de retractarse de la misma, tal como lo demostraremos en el curso del proceso.

Igualmente nos oponemos a esta pretensión porque si al momento de afiliarse la parte actora al RAIS se cumplió con los requisitos vigentes en la normatividad legal, mal podría exigirse el cumplimiento de otros sino estaban establecidos en la Ley.

Y al respecto es muy importante recordar que el deber de información no nace con la llamada línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en materia de nulidad o ineficacia de la afiliación. Ese deber de información tiene desarrollo normativo en los Decreto 720 1994, Decreto 656 de 1994, Estatuto financiero anterior a la Ley 100 y el Decreto 663 de 1993, Ley 1328 de 2009, Decreto 2555 de 2010, Ley 1748 de 2014, Circular 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera.

Tal deber no ha sido estático, ha evolucionado. i) Inicialmente el Decreto 692 de 1994 señalaba que la constancia de la voluntad de afiliación era el formulario de afiliación con la correspondiente leyenda pre-impresa ii) La circular 019 de 1998 reitera esa reglamentación, indicando que la constancia de la voluntad era el formulario de afiliación con la consignación de que la selección era libre y voluntaria iii) A partir del Decreto 2555 de 2010 y de la Ley 1748 de 2014, se han establecido unos criterios para la asesoría que deben dar las AFP's, como lo son: la obligatoriedad de realizar proyecciones financieras cuando así se solicite, la obligatoriedad de doble asesoría para el traslado de régimen y la remisión de extractos financieros detallados y comprensibles iv) La Circular 016 de 2016 regula la reasesoría frente a los afiliados que están llegando a la edad del límite decenal de retorno. Por ello, ese deber de información es aplicable de manera general a cualquier afiliado y es inherente a la actividad de las AFP's.

Atendiendo la normatividad legal vigente para la época en que el demandante ejerció de manera libre y voluntaria su derecho de movilidad entre los regímenes pensionales existentes en Colombia, ha de resaltarse que no se exigía legalmente para ninguna Administradora de Fondos de Pensiones, el suministrar por escrito ningún tipo de cálculo financiero o proyección actuarial al potencial afiliado, y tampoco se exigía dejar por escrito el soporte de haber recibido la asesoría pensional; pues el proceso de asesoría era básicamente verbal; sólo hasta el año 2014, con la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015, surgió la obligación para las administradoras de fondos de pensiones de poner a “disposición de sus afiliados herramientas financieras que les permitan conocer las consecuencias de su traslado”, tal y como lo señala la Superintendencia Financiera de Colombia en concepto No. 2015123910-002 del 29 de diciembre de 2015.

De otro lado, tampoco es factible que se declare la nulidad o ineficacia del traslado por cuanto el demandante tiene la calidad de pensionado y al respecto la reciente sentencia SL 373 de 2021 con ponencia de la Magistrada doctora Gloria Cecilia Dueñas, de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en un asunto de pensionado bajo la modalidad de retiro

programado, sostiene:

*“Esta circunstancia conduce a la Corte a interrogarse si es posible, bajo el manto de la ineficacia de la afiliación, que el demandante pensionado del régimen de ahorro individual con solidaridad, vuelva al mismo estado en el que se encontraba antes de su traslado al RPMPD.*

*Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante), lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un status jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relación es jurídicas y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones.*

*Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que reversar esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el capital habría perdido su integridad y, por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública.*

*Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata.*

*Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AF. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de las opciones pensionales intervienen en la administración y gestión del riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado.*

*Por lo tanto, no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida.*

*Si se trata de una garantía de pensión mínima, volver las cosas a su estado anterior, implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía. Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requería la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defienda los intereses del*



*Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono.*

*Ni que decir cuando el capital se ha desfinanciado, especialmente cuando el afiliado decide pensionarse anticipadamente, o de aquellos casos en que ha optado por los excedentes de libre disponibilidad (art. 85 de la Ley 100 de 1993), en virtud de los cuales recibe la devolución de una parte de su capital ahorrado. En esta hipótesis, los recursos, ya desgastados, inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.*

*La Corte podrá discurrir y profundizar en muchas más situaciones problemáticas que generaría la invalidación del estado de pensionado. No obstante, considera que los ejemplos citados son suficientes para demostrar el argumento según el cual la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones.*

...

***Finalmente, de acuerdo con lo expuesto, la Corte abandona el criterio sentado en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado.*** (El resaltado es mío).

**A LA TERCERA:** Nos oponemos a esta pretensión pues al cumplirse con todos los requisitos y formalidades legales en la afiliación de la parte actora a la entidad que represento y al no haberse retractado de dicho traslado y ostentar la calidad de pensionado, no hay lugar a que se declare la nulidad del traslado de régimen y por lo tanto no deberá declararse su retorno al RPM.

De otro lado, tampoco es factible que se declare la nulidad o ineficacia del traslado por cuanto el demandante tiene la calidad de pensionado y al respecto la reciente sentencia SL 373 de 2021 con ponencia de la Magistrada doctora Gloria Cecilia Dueñas, de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en un asunto de pensionado bajo la modalidad de retiro programado, sostiene:

*“Esta circunstancia conduce a la Corte a interrogarse si es posible, bajo el manto de la ineficacia de la afiliación, que el demandante pensionado del régimen de ahorro individual con solidaridad, vuelva al mismo estado en el que se encontraba antes de su traslado al RPMPD.*

*Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante), lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un status jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relación*

*es jurídicas y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones.*

*Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que reversar esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el capital habría perdido su integridad y, por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública.*

*Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata.*

*Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AF. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de las opciones pensionales intervienen en la administración y gestión del riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado.*

*Por lo tanto, no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida.*

*Si se trata de una garantía de pensión mínima, volver las cosas a su estado anterior, implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía. Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requeriría la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defienda los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono. (El resaltado es mío).*

*Ni que decir cuando el capital se ha desfinanciado, especialmente cuando el afiliado decide pensionarse anticipadamente, o de aquellos casos en que ha optado por los excedentes de libre disponibilidad (art. 85 de la Ley 100 de 1993), en virtud de los cuales recibe la devolución de una parte de su capital ahorrado. En esta hipótesis, los recursos, ya desgastados, inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.*

*La Corte podrá discurrir y profundizar en muchas más situaciones problemáticas que generaría la*

*invalidación del estado de pensionado. No obstante, considera que los ejemplos citados son suficientes para demostrar el argumento según el cual la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones.*

...

***Finalmente, de acuerdo con lo expuesto, la Corte abandona el criterio sentado en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado.*** (El resaltado es mío).

**A LA CUARTA:** Nos oponemos a esta pretensión pues al cumplirse con todos los requisitos y formalidades legales en la afiliación de la parte actora a PROTECCION y por ende traslado de régimen y al encontrarse ya pensionado, no hay razón para declarar la nulidad del traslado de régimen y como consecuencia tampoco se deberá declarar el traslado de los aportes, ni de ningún otro concepto que se encuentre en la Cuenta de Ahorro Individual del demandante.

También debemos resaltar que el demandante no se retractó de su decisión en las oportunidades legales que tuvo para hacerlo, es decir el único responsable de que en la actualidad se encuentre pensionado en el RAIS, es el mismo demandante y menos aún se podrá declarar la nulidad pretendida, teniendo en cuenta que el actor tiene la calidad de pensionado.

**A LA QUINTA:** Aunque no está dirigida contra mi representada me permito manifestar que nos oponemos a esta pretensión pues al cumplirse con todos los requisitos y formalidades legales en la afiliación de la parte actora a la entidad que represento y al no haberse retractado de dicho traslado y ostentar la calidad de pensionado, no hay lugar a que se declare la nulidad del traslado de régimen y por lo tanto no deberá declararse su retorno al RPM y más aun teniendo en cuenta que el actor ostenta la calidad de pensionado.

Nos oponemos a esta pretensión porque sino son de recibo las condenas solicitadas en contra de mí representada, y si mi representada no ha transgredido ninguna norma legal ni al afiliarse al demandante ni al negar el traslado de régimen con fundamento en la Ley, no podrá ser condenada al pago de las costas y agencias en derecho por cuanto lo accesorio sigue la suerte de lo principal; por lo que nos oponemos a que se imponga condena alguna por este concepto.

**A LA SEXTA:** No me corresponde pronunciarme por no estar referida contra mi representada. Mas sin embargo, se hace necesario manifestar que el demandante está pensionado en el RAIS desde junio de 2017, es decir que cualquier acción que se quiera iniciar por perjuicios está más que prescrita.

**A LA SEPTIMA:** No me corresponde pronunciarme por no estar referida contra mi representada. Mas sin embargo, se hace necesario manifestar que el demandante está pensionado en el RAIS desde junio de 2017, es decir que cualquier acción que se quiera iniciar por perjuicios está más que prescrita.



**A LA OCTAVA:** No me corresponde pronunciarme por no estar referida contra mi representada. Mas sin embargo, se hace necesario manifestar que el demandante está pensionado en el RAIS desde junio de 2017, es decir que cualquier acción que se quiera iniciar por perjuicios está más que prescrita.

**A LA NOVENA:** Al no haber ningún fundamento para declarar la nulidad de traslado aquí solicitada, tampoco hay lugar a que se decrete ninguna acreencia en virtud de la aplicación de las facultades ultra y extra petita.

**A LA DECIMA:** Es consecuencia de las anteriores pretensiones y sí mi representada ha actuado de acuerdo con las normas legales que regulan el RAIS, creado por el Legislador, por sustracción de materia no podrá ser condenada al pago de las costas y agencias en derecho, dado que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por el contrario quien debe asumir una condena en costas es la parte actora, quien resultará vencida en el proceso.

#### **A LAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS**

**A LA PRIMERA:** Nos oponemos a esta pretensión, por cuanto la pretensión encaminada a que se reconozcan a la parte actora perjuicios, carece de todo sustento legal y fáctico, por cuanto no está prevista dentro del Régimen de Seguridad Social – Sistema General de Pensiones, el cual consagra las prestaciones específicas que deben ser satisfechas al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos de manera expresa.

Igualmente cabe resaltar que con la presentación de esta demanda se pretende el resarcimiento de perjuicios patrimoniales y morales por lo que se debe demostrar: **i)** que se causó un daño, **ii)** Y, la ganancia o provecho que ha dejado de reportarse, lo cual, tampoco existe dado que la parte actora no ha perdido su derecho pensional, además de tener en cuenta que los rendimientos que generaron sus aportes administrados por la Administradora del RAIS a la cual ha estado afiliada, al contrario de lo que la parte demandante pretende, le permitieron incrementar su patrimonio y así ha sido desde el momento que está disfrutando de su pensión de vejez.

Mi representada además de haber actuado de buena fé, ha actuado de acuerdo con lo que el Legislador estableció para el RAIS y es de tener en cuenta que al crearse el RAIS, el Legislador no lo hizo ni para engañar ni defraudar a quienes se afiliaran a dicho Regimen.

Finalmente, de todo lo anterior puede concluirse que en el presente caso no se encuentran demostrados los elementos estructurales de la indemnización de perjuicios reclamada equivocadamente por el apoderado de la parte demandante, lo que conduce a que no pueda proferirse condena alguna por este aspecto en contra de mi representada.

Por otra parte, al afiliarse a mi representada se le brindó la información suficiente respecto del acto jurídico realizado y más aún cuando solicitó y antes de solicitar el reconocimiento de la prestación económica se le reasesoró, lo que implica que la decisión de trasladarse de fondo de pensiones realizado por la actora y solicitar su pensión de vejez que ya disfruta, obedeció al libre ejercicio de su derecho de trasladarse de AFP y si alguna situación adversa se deriva de dicho acto, sólo a ella es imputable.

Más aún teniendo en cuenta de que mi representada no guardó silencio ni al momento de la afiliación ni al momento de la reasesoría ni antes ni después de que el demandante solicitara la prestación económica.

**A LA SEGUNDA:** Nos oponemos a esta pretensión, en primer lugar porque en ninguna norma existe la solidaridad entre las diferentes AFP ni de uno ni de otro Régimen pensional. Nos oponemos, por cuanto está encaminada a que se reconozcan a la parte actora perjuicios, carece de todo sustento legal y fáctico, por cuanto no está prevista dentro del Régimen de Seguridad Social – Sistema General de Pensiones, el cual consagra las prestaciones específicas que deben ser satisfechas al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos de manera expresa.

Igualmente cabe resaltar que con la presentación de esta demanda se pretende el resarcimiento de perjuicios por lo que se debe demostrar: **i)** que se causó un daño, **ii)** Y, la ganancia o provecho que ha dejado de reportarse, lo cual, tampoco existe dado que la parte actora no ha perdido su derecho pensional, además de tener en cuenta que los rendimientos que generaron sus aportes administrados por la Administradora del RAIS a la cual ha estado afiliada, al contrario de lo que la parte demandante pretende, le permitieron incrementar su patrimonio y así ha sido desde el momento que está disfrutando de su pensión de vejez..

Finalmente, de todo lo anterior puede concluirse que en el presente caso no se encuentran demostrados los elementos estructurales de la indemnización de perjuicios reclamada equivocadamente por el apoderado de la parte demandante, lo que conduce a que no pueda proferirse condena alguna por este aspecto en contra de mi representada, más aun teniendo en cuenta que el demandante tiene la calidad de pensionado y que tanto antes como después de haber solicitado la prestación económica se le brindó toda la información necesaria para que decidiera o no pertenecer al RAIS y pensionarse en este régimen.

Por otra parte, al afiliarse a mi representada se le brindó la información suficiente respecto del acto jurídico realizado y más aún cuando solicitó y antes de solicitar el reconocimiento de la prestación económica se le reasesoró, lo que implica que la decisión de trasladarse de fondo de pensiones realizado por la actora y solicitar su pensión de vejez que ya disfruta, obedeció al libre ejercicio de su derecho de trasladarse de AFP y si alguna situación adversa se deriva de dicho acto, sólo a ella es imputable.

**A LA TERCERA:** Nos oponemos a esta pretensión, pues respecto de los perjuicios solicitados, tenemos en primer lugar que existe falta de legitimación en la causa frente a mí representada, por cuanto el traslado de la actora al Fondo de Pensiones que actualmente administra Protección, se dio como traslado de AFP y NO DE RÉGIMEN, por lo tanto ningún perjuicio se puede endilgar a mí representada, respecto de una actuación en la que no tuvo participación o injerencia alguna.

Por otra parte, al afiliarse al mi representada se le brindó la información suficiente respecto del acto jurídico realizado, esto es, traslado de AFP, lo que implica que la decisión de trasladarse de fondo de pensiones realizado por la actora, obedeció al libre ejercicio de su derecho de trasladarse de AFP y si alguna situación adversa se deriva de dicho acto, sólo a ella es imputable ya que en lugar de trasladarse de Régimen y retornar al RPM, prefirió fue trasladarse de AFP dentro del RAIS.

De todos modos, la pretensión encaminada a que se reconozcan a la parte actora perjuicios, carece de todo sustento legal y fáctico, por cuanto no está prevista dentro del Régimen de Seguridad Social – Sistema General de Pensiones, el cual consagra las prestaciones específicas que deben ser satisfechas al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos de manera expresa y además, porque al manifestar su deseo tácito de permanecer en el RAIS, conocía perfectamente las condiciones de estar en este Régimen, sus ventajas y desventajas y así decidió solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez, de la cual goza desde junio de 2017.

Ahora, es necesario también indicar que por el contrario, su cuenta de ahorro individual ha tenido incrementos en razón de la rentabilidad que éstos generan mes a mes, por lo que no se ha causado detrimento alguno en su patrimonio. La administración de los recursos de la cuenta de la demandante por mi representada se hizo con la diligencia que corresponde, generando como se ha dicho igualmente rendimientos que le permitieron incrementar su patrimonio; además porque la Superintendencia Financiera de Colombia vigila juiciosamente el ahorro de los afiliados a los fondos obligatorios y finalmente porque a la parte demandante no se le afectó su derecho a acceder a una pensión de vejez, la cual deberá ser analizada a la luz del artículo 64 y siguientes de la Ley 100 de 1993 por ser las disposiciones que regulan dicha prestación en el RAIS.

Igualmente cabe resaltar que con la presentación de esta demanda se pretende el resarcimiento de perjuicios por lo que se debe demostrar: **i)** que se causó un daño, lo cual no podrá demostrarse por lo menos frente a PROTECCIÓN, en atención a que mi representada, no tuvo participación alguna en el traslado de régimen de la actora. Como se ha venido explicando su traslado al fondo de pensiones obligatorias administrado por la mi representada fue producto de un traslado de AFP y no de régimen **ii)** Y, la ganancia o provecho que ha dejado de reportarse, lo cual, tampoco existe dado que la parte actora no ha perdido su derecho pensional, además de tener en cuenta que los rendimientos que generaron sus aportes administrados por las Administradoras del RAIS a las cuales ha estado afiliada, al contrario de lo que la parte demandante pretende, le permitieron incrementar su patrimonio.

Finalmente, de todo lo anterior puede concluirse que en el presente caso no se encuentran demostrados los elementos estructurales de la indemnización de perjuicios reclamada equivocadamente por el apoderado de la parte demandante, lo que conduce a que no pueda proferirse condena alguna por este aspecto en contra de mi representada.

**A LA CUARTA:** Nos oponemos a esta pretensión, pues respecto de los perjuicios solicitados, tenemos en primer lugar que existe falta de legitimación en la causa frente a mí representada, por cuanto el traslado de la actora al Fondo de Pensiones que actualmente administra Protección, se dio como traslado de AFP y NO DE RÉGIMEN, por lo tanto ningún perjuicio se puede endilgar a mí representada, respecto de una actuación en la que no tuvo participación o injerencia alguna.

Por otra parte, al afiliarse al mi representada se le brindó la información suficiente respecto del acto jurídico realizado, esto es, traslado de AFP, lo que implica que la decisión de trasladarse de fondo de pensiones realizado por la actora, obedeció al libre ejercicio de su derecho de trasladarse de AFP y si alguna situación adversa se deriva de dicho acto, sólo a ella es imputable ya que en lugar de trasladarse de Régimen y retornar al RPM, prefirió fue trasladarse de AFP dentro del RAIS.

De todos modos, la pretensión encaminada a que se reconozcan a la parte actora perjuicios, carece de todo sustento legal y fáctico, por cuanto no está prevista dentro del Régimen de Seguridad Social – Sistema General de Pensiones, el cual consagra las prestaciones específicas que deben ser satisfechas al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos de manera expresa y además, porque al manifestar su deseo tácito de permanecer en el RAIS, conocía perfectamente las condiciones de estar en este Regimen, sus ventajas y desventajas y así decidió solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez, de la cual goza desde junio de 2017.

Ahora, es necesario tambien indicar que por el contrario, su cuenta de ahorro individual ha tenido incrementos en razón de la rentabilidad que éstos generan mes a mes, por lo que no se ha causado detrimento alguno en su patrimonio. La administración de los recursos de la cuenta de la demandante por mi representada se hizo con la diligencia que corresponde, generando como se ha dicho igualmente rendimientos que le permitieron incrementar su patrimonio; además porque la Superintendencia Financiera de Colombia vigila juiciosamente el ahorro de los afiliados a los fondos obligatorios y finalmente porque a la parte demandante no se le afectó su derecho a acceder a una pensión de vejez, la cual deberá ser analizada a la luz del artículo 64 y siguientes de la Ley 100 de 1993 por ser las disposiciones que regulan dicha prestación en el RAIS.

Igualmente cabe resaltar que con la presentación de esta demanda se pretende el resarcimiento de perjuicios por lo que se debe demostrar: **i)** que se causó un daño, lo cual no podrá demostrarse por lo menos frente a PROTECCIÓN, en atención a que mi representada, no tuvo participación alguna en el traslado de régimen de la actora. Como se ha venido explicando su traslado al fondo de pensiones obligatorias administrado por la mi representada fue producto de un traslado de AFP y no de régimen **ii)** Y, la ganancia o provecho que ha dejado de reportarse, lo cual, tampoco existe dado que la parte actora no ha perdido su derecho pensional, además de tener en cuenta que los rendimientos que generaron sus aportes administrados por las Administradoras del RAIS a las cuales ha estado afiliada, al contrario de lo que la parte demandante pretende, le permitieron incrementar su patrimonio.

Finalmente, de todo lo anterior puede concluirse que en el presente caso no se encuentran demostrados los elementos estructurales de la indemnización de perjuicios reclamada equivocadamente por el apoderado de la parte demandante, lo que conduce a que no pueda proferirse condena alguna por este aspecto en contra de mi representada.

**A LA QUINTA:** Nos oponemos a esta pretensión, en virtud de que mi representada reconoció la pensión de vejez a la parte actora, en forma oportuna y de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan el RAIS, es decir que mal puede decirse que no ha sido cancelada en forma correcta, además de que dicha prestación se le ha cancelado cumplidamente desde junio de 2017.

**A LA SEXTA:** Nos oponemos, a que se CONDENE a mi representada a lo solicitado en el presente numeral, toda vez que las actuaciones de mí representada han estado ceñidas a la ley y por ende no se le puede imputar ningún tipo de “perjuicio”, amén de que esta pretensión carece de todo sustento legal y fáctico, por cuanto no está prevista dentro del Régimen de Seguridad Social – Sistema General de Pensiones, el cual consagra las prestaciones específicas que deben ser satisfechas al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos contemplados de manera expresa.

Lo cierto es que el demandante suscribió con total conocimiento y voluntariedad su vinculación ante mi representada, por lo que no presentó un vicio en el consentimiento que pudiera derivar en una condena por pago de perjuicios que claramente no están probados por la demandante, como es su deber procesal.

Ahora bien, como ya se explicó en los párrafos precedentes, la vinculación de la parte actora a PROTECCION S.A., fue un acto libre y voluntario, razón por la cual no puede pretender que después **más de 20 años** de trasladarse al RAIS, endilgarle a esta Administradora, la responsabilidad de una decisión propia, pues recordemos que NUNCA se le obligó o presionó para que se vinculara al RAIS pese a que luego de la asesoría brindada tuvo la oportunidad de determinar si lo que ofrecía el RAIS – y expresamente señalado en la ley – se acogía a sus intereses pensionales.

Resulta extraño que pretenda el resarcimiento de un perjuicio cuando ha venido disfrutando de una pensión de vejez, lo que ha derivado contrario a lo que argumenta, que su patrimonio se haya visto incrementado al recibir las mesadas pensionales pagadas oportunamente por la Administradora.

Es de señalar que la parte demandante en una indebida acreditación del aparente perjuicio sufrido, pretende argumentar que, a partir de un supuesto incumplimiento al deber de información en cabeza de mi representada, se le ocasionó un perjuicio, y ante ello debo reiterar que a la parte actora se le suministró toda la información en forma clara, transparente y veraz y adicional a lo anterior, se le reasesoró al solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez, cumpliendo así con todo el deber que la Ley impone a las AFP del RAIS.

Luego, si con la presentación de esta demanda pretende el resarcimiento de perjuicios, debe entonces demostrar: (i) Que se causó un daño, que de hecho no lo fue en la medida en que actualmente goza de una pensión de vejez, (ii) la ganancia o provecho que ha dejado de reportarse, lo cual, tampoco es existente dado que reiteramos el demandante ha visto incrementado su patrimonio desde el momento en que se le reconoció la pensión de vejez (iii) la actuación u omisión irregular del tercero para causar el daño, que tampoco se configura en la medida en que el demandante decidió de manera libre, voluntaria e informada afiliarse al RAIS, y como ratificación de tal hecho, se efectúa el pago de aportes pensionales a su nombre, solicita y gestiona todos los trámites pertinentes para obtener la pensión de vejez, actos jurídicos que gozan de legalidad y que por tanto desvirtúan la existencia de un daño que a todas éstas, de configurarse en un menor valor de pensión al que hubiere recibido en el RPM, solo es IMPUTABLE al demandante quien decidió, como lo acabamos de señalar no solo afiliarse al RAIS sino pensionarse en el mismo.

De modo que el ordenamiento jurídico ha sido claro en indicar que no basta con que una persona solicite el resarcimiento de perjuicios para que estos les sean concedidos, pues para ello es necesario que se acredite que estos se produjeron y sobre todo, que los elementos que constituyen este tipo de responsabilidades, se configuren. Además de ello, debe demostrarse el nexo de causalidad que existe entre este daño y la conducta del tercero, y en el presente caso, la decisión de trasladarse al RAIS es únicamente imputable al demandante, sin que con ello se derive ningún perjuicio, teniendo en cuenta que con el traslado, no perdió su derecho a obtener una pensión de vejez, todo lo contrario, la ha disfrutado desde el momento en que la solicitó.

**A LA SEPTIMA:** Nos oponemos, a la condena ultra y extra petita, al carecer las pretensiones de la parte demandante de razones jurídicas y elementos probatorios que puedan sustentar dicha condena.

Se debe precisar que el demandante firmó el formulario de vinculación con mi representada de manera consciente y voluntaria, ratificando su deseo de permanecer en el RAIS, materializada su decisión de ratificación, acogiendo al beneficio del RAIS de obtener su pensión anticipada de vejez. En consideración, no le asiste ningún tipo de razón lógica pretender esta condena en contra de mi representada.

**A LA OCTAVA:** Nos oponemos al pago de costas y agencias en derecho, al carecer las pretensiones de la parte demandante de razones jurídicas y elementos probatorios que puedan sustentar dicha condena y en consecuencia a favor de mi representada, condenar en costas y agencias del proceso a la parte actora.

Se debe precisar que el demandante firmó el formulario de vinculación con mi representada de manera consciente y voluntaria, accediendo así a los efectos que implica el régimen de ahorro individual, además ha estado vinculado por más de 20 años al mismo, antes como afiliado y actualmente como pensionado, por lo tanto, evidentemente conoce este sistema y en consideración no le asiste ningún tipo de razón lógica pretender condenar a mi representada al pago de costas.

PROTECCION S.A. siempre ha actuado con la buena fe que se presume de toda persona natural y jurídica por mandato constitucional, en la relación de afiliación que lo vinculó con la hoy demandante.

### **A LOS HECHOS**

**AL 1:** NO ME CONSTA por tratarse de hechos que no son susceptibles de confesión los cuales deben ser demostrados con los documentos idóneos, que son la cédula de ciudadanía y el Registro Civil de nacimiento.

**AL 2:** NO ME CONSTA, por no estar referido a mi representada.

**AL 3:** NO ME CONSTA por no estar referida a mi representada.

**AL 4:** En lo que respecta a mi representada NO ES CIERTO. A los potenciales afiliados se les realizaba y aún así se hace, una asesoría con total profesionalismo y ética. Es más, todos los asesores sin excepción contaban con un instructivo o guía que debían seguir para asesorar de forma clara y entendible a futuros clientes o clientes ya afiliados, dependiendo de su variación del perfil en el tiempo. Es decir que los asesores o ejecutivos de cuenta sí contaban con una capacitación e instructivo sobre qué tener en cuenta para cada cliente al momento de hablar con ellos, conocer su estado actual laboral, familiar y de ingresos, haciéndole conocer sus riesgos en el evento que existieran, y así poderlo orientar con el fin de que cada uno tomara su propia decisión de afiliarse o no. Este instructivo o guía era y sigue siendo de obligatorio cumplimiento. Los asesores o ejecutivos de cuenta entregaban explicaciones claras, comprensibles, tanto de la situación financiera actual como de la futura, teniendo siempre como horizonte la pensión de cada uno de los



asesorados, pero decir ahora después de más de 20 años que no la asesoraron debidamente, no es concebible, pues su objetivo en este proceso es culpar a la AFP a la que ha estado afiliado y de la cual recibió permanentemente asesoría integral y profesional, pues la parte actora fue lo suficientemente ilustrada para que tomara su decisión de afiliarse y de permanecer en el RAIS de manera libre y consciente.

En este caso puntual, al demandante se le informó tal como lo dice la Ley 100 de 1993, que en el RAIS se puede pensionar a cualquier edad, siempre y cuando cumpla el requisito que la misma norma establece.

También se le informó, siendo que ésta era la mayor inquietud a quienes se les asesoraba, pues era lo que mas preguntaban, de que se podía RETRACTAR o devolverse al RPM.

Es decir que no puede pretender hoy, después de más de 25 años, manifestar que no se le informó.

Atendiendo la normatividad legal vigente para la época en que la parte actora ejerció de manera libre y voluntaria su derecho de afiliarse a uno u otro regimen pensional existente en Colombia, ha de resaltarse que no se exigía legalmente para ninguna Administradora de Fondos de Pensiones, el suministrar por escrito ningún tipo de cálculo financiero o proyección actuarial al potencial afiliado, y tampoco se exigía dejar por escrito el soporte de haber recibido la asesoría pensional; pues el proceso de asesoría era básicamente verbal.

Así mismo se le realizaron también proyecciones y como su nombre lo indica, simula, proyecta una expectativa respecto a un derecho que si bien es cierto, es fluctuante en cuanto al monto que debe reconocerse, esta suma solo será real al momento de la materialización del derecho, por ello no puede entenderse que el resultado del simulador pueda entenderse o constituirse como una obligación contractual para PROTECCION.

También vale la pena manifestar que las proyecciones que se realizan para calcular el momento en el cual un afiliado podría acceder a pensión de vejez son MERAS APROXIMACIONES y en ningún momento establecen una fecha exacta, debido a que dependen de factores cambiantes constantemente.

Los factores que inciden en que las proyecciones son un aproximado y no dicten una fecha o valor exacto con el cual una persona se puede pensionar en el RAIS son:

- a. Los movimientos del mercado, ya que de ellos depende la mayor o menor rentabilidad del capital, lo cual va a generar cambios en el saldo de la cuenta de ahorro individual.
- b. Las cotizaciones realizadas, pues el cálculo se hace bajo el supuesto de que el afiliado va a seguir cotizado sobre la misma base salarial que tiene en el momento de la proyección, hasta la fecha en que recibiría la pensión.
- c. La fidelidad en las cotizaciones, dado que el cálculo se realiza tomando como base que los afiliados continúen cotizando de manera ininterrumpida hasta el momento en que desee pensionarse y en ese caso la fidelidad es del 100%. Pero si presenta interrupciones la fidelidad disminuye lo cual afecta el valor de la proyección.
- d. También y muy importante es que se debe tener en cuenta los beneficiarios de la pensión de

sobrevivencia en caso de fallecimiento, ya que a ellos se les deberá continuar pagando la pensión (pensión de sobrevivientes).

- e. Importantísimo, la modalidad de pensión. Dependiendo de la modalidad se determinarán factores como la posibilidad de negociar el bono pensional, si hay lugar a ello, o el capital requerido para a una prestación.

Y en el caso de que el demandante no tenga en su cuenta de ahorro individual el capital suficiente para financiar la pensión de vejez y si cumple los requisitos que la ley exige, será entonces beneficiaria de la Garantía de Pensión mínima, creado por la Ley 100 de 1993 y que establece: *“los afiliados que a los 62 años si son hombres y 57 si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente ley, y hubiesen cotizado por lo menos 1.150 semanas, tendrán derecho a que el Gobierno, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión”*.

De otro lado, es muy importante advertir que a pesar de que las demandas de nulidad solo están basadas en el monto de la pensión, los dos regímenes pensionales no pueden ser comparados únicamente por el monto de la pensión que le pueda corresponder al afiliado en uno u otro escenario, sobre todo porque el de Ahorro Individual tiene otras bondades que no necesariamente representan un beneficio inmediato sino futuro. Es así como el Sistema General de Pensiones cuenta con dos regímenes excluyentes entre sí creados por el Legislador y por lo tanto no se puede olvidar las características propias de cada una, resaltando las siguientes:

En el RAIS, el afiliado posee una cuenta propia de ahorro individual que forma parte de su patrimonio, mientras que en el RPM no existe patrimonio individualizado de los cotizantes ya que los aportes van a un fondo común pensional público para financiar las pensiones de todos los afiliados de ese régimen.

En cuanto a obtener excedentes de libre disponibilidad, en el RAIS es una característica que consiste en que el afiliado al momento de pensionarse, puede escoger por recibir una pensión de vejez más baja a cambio de obtener que de su cuenta individual se le entregue un excedente que se liquida con base en un cálculo actuarial que tiene en cuenta el IBL a esa fecha, mientras que en el RPM esto no es posible porque las cotizaciones van a un fondo común pensional para financiar todas las pensiones de sus afiliados.

Sobre pensión anticipada de vejez: En el RAIS, siempre y cuando se cumplan los requisitos que la ley exige, es posible, mientras que en el RPM deben cumplirse obligatoriamente la edad pensional que la ley ordena.

En cuanto a los ahorros que se encuentran en la CAI, en el RAIS si el afiliado fallece y no tiene beneficiarios de su pensión, forman parte de la masa sucesoral. En cambio, en el RPM esta posibilidad no existe, pues las cotizaciones efectuadas en vida del afiliado forman parte del fondo común pensional para cumplir con el principio de solidaridad, es decir jamás podrán ser parte de la sucesión.



Con respecto a la densidad del número de semanas cotizadas para pensionarse: en el RAIS, se mide por el capital acumulado en cuenta, el bono pensional si lo hubiere y los rendimientos obtenidos durante su permanencia, se le suman también los aportes voluntarios que pueda ahorrar el afiliado cotizante. En el RPM esto no es posible, puesto que debe cumplirse con el requisito mínimo de las 1.300 semanas y en este régimen no se admiten aportes voluntarios del afiliado.

Por último, en el RAIS sino se cumplen los requisitos para pensionarse, el afiliado tiene derecho a la devolución de saldos acumulados en su CAI, incluyendo los rendimientos y el bono pensional si lo hubiere. Al contrario, en el RPM se reconoce una indemnización sustitutiva que es muy inferior a una devolución de saldos.

**AL 5: NO ES CIERTO.** A los potenciales afiliados se les realizaba y aún así se hace, una asesoría con total profesionalismo y ética. Es más, todos los asesores sin excepción contaban con un instructivo o guía que debían seguir para asesorar de forma clara y entendible a futuros clientes o clientes ya afiliados, dependiendo de su variación del perfil en el tiempo. Es decir que los asesores o ejecutivos de cuenta sí contaban con una capacitación e instructivo sobre qué tener en cuenta para cada cliente al momento de hablar con ellos, conocer su estado actual laboral, familiar y de ingresos, haciéndole conocer sus riesgos en el evento que existieran, y así poderlo orientar con el fin de que cada uno tomara su propia decisión de afiliarse o no. Este instructivo o guía era y sigue siendo de obligatorio cumplimiento. Los asesores o ejecutivos de cuenta entregaban explicaciones claras, comprensibles, tanto de la situación financiera actual como de la futura, teniendo siempre como horizonte la pensión de cada uno de los asesorados, pero decir ahora después de más de 20 años que no la asesoraron debidamente, no es concebible, pues su objetivo en este proceso es culpar a la AFP a la que ha estado afiliado y de la cual recibió permanentemente asesoría integral y profesional, pues la parte actora fue lo suficientemente ilustrada para que tomara su decisión de afiliarse y de permanecer en el RAIS de manera libre y consciente.

En este caso puntual, al demandante se le informó tal como lo dice la Ley 100 de 1993, que en el RAIS se puede pensionar a cualquier edad, siempre y cuando cumpla el requisito que la misma norma establece.

También se le informó, siendo que ésta era la mayor inquietud a quienes se les asesoraba, pues era lo que mas preguntaban, de que se podía RETRACTAR o devolverse al RPM.

Es decir que no puede pretender hoy, después de más de 25 años, manifestar que no se le informó.

Atendiendo la normatividad legal vigente para la época en que la parte actora ejerció de manera libre y voluntaria su derecho de afiliarse a uno u otro regimen pensional existente en Colombia, ha de resaltarse que no se exigía legalmente para ninguna Administradora de Fondos de Pensiones, el suministrar por escrito ningún tipo de cálculo financiero o proyección actuarial al potencial afiliado, y tampoco se exigía dejar por escrito el soporte de haber recibido la asesoría pensional; pues el proceso de asesoría era básicamente verbal.

Así mismo se le realizaron también proyecciones y como su nombre lo indica, simula, proyecta una expectativa respecto a un derecho que si bien es cierto, es fluctuante en cuanto al monto que debe reconocerse, esta suma solo será real al momento de la materialización del derecho, por ello no

puede entenderse que el resultado del simulador pueda entenderse o constituirse como una obligación contractual para PROTECCION.

También vale la pena manifestar que las proyecciones que se realizan para calcular el momento en el cual un afiliado podría acceder a pensión de vejez son MERAS APROXIMACIONES y en ningún momento establecen una fecha exacta, debido a que dependen de factores cambiantes constantemente.

Los factores que inciden en que las proyecciones son un aproximado y no dicten una fecha o valor exacto con el cual una persona se puede pensionar en el RAIS son:

- a. Los movimientos del mercado, ya que de ellos depende la mayor o menor rentabilidad del capital, lo cual va a generar cambios en el saldo de la cuenta de ahorro individual.
- b. Las cotizaciones realizadas, pues el cálculo se hace bajo el supuesto de que el afiliado va a seguir cotizado sobre la misma base salarial que tiene en el momento de la proyección, hasta la fecha en que recibiría la pensión.
- c. La fidelidad en las cotizaciones, dado que el cálculo se realiza tomando como base que los afiliados continúen cotizando de manera ininterrumpida hasta el momento en que desee pensionarse y en ese caso la fidelidad es del 100%. Pero si presenta interrupciones la fidelidad disminuye lo cual afecta el valor de la proyección.
- d. También y muy importante es que se debe tener en cuenta los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia en caso de fallecimiento, ya que a ellos se les deberá continuar pagando la pensión (pensión de sobrevivientes).
- e. Importantísimo, la modalidad de pensión. Dependiendo de la modalidad se determinarán factores como la posibilidad de negociar el bono pensional, si hay lugar a ello, o el capital requerido para una prestación.

Y en el caso de que el demandante no tenga en su cuenta de ahorro individual el capital suficiente para financiar la pensión de vejez y si cumple los requisitos que la ley exige, será entonces beneficiaria de la Garantía de Pensión mínima, creado por la Ley 100 de 1993 y que establece: *“los afiliados que a los 62 años si son hombres y 57 si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente ley, y hubiesen cotizado por lo menos 1.150 semanas, tendrán derecho a que el Gobierno, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión”*.

De otro lado, es muy importante advertir que a pesar de que las demandas de nulidad solo están basadas en el monto de la pensión, los dos regímenes pensionales no pueden ser comparados únicamente por el monto de la pensión que le pueda corresponder al afiliado en uno u otro escenario, sobre todo porque el de Ahorro Individual tiene otras bondades que no necesariamente representan un beneficio inmediato sino futuro. Es así como el Sistema General de Pensiones cuenta con dos regímenes excluyentes entre sí creados por el Legislador y por lo tanto no se puede olvidar las características propias de cada una, resaltando las siguientes:

En el RAIS, el afiliado posee una cuenta propia de ahorro individual que forma parte de su patrimonio, mientras que en el RPM no existe patrimonio individualizado de los cotizantes ya que

los aportes van a un fondo común pensional público para financiar las pensiones de todos los afiliados de ese régimen.

En cuanto a obtener excedentes de libre disponibilidad, en el RAIS es una característica que consiste en que el afiliado al momento de pensionarse, puede escoger por recibir una pensión de vejez más baja a cambio de obtener que de su cuenta individual se le entregue un excedente que se liquida con base en un cálculo actuarial que tiene en cuenta el IBL a esa fecha, mientras que en el RPM esto no es posible porque las cotizaciones van a un fondo común pensional para financiar todas las pensiones de sus afiliados.

Sobre pensión anticipada de vejez: En el RAIS, siempre y cuando se cumplan los requisitos que la ley exige, es posible, mientras que en el RPM deben cumplirse obligatoriamente la edad pensional que la ley ordena.

En cuanto a los ahorros que se encuentran en la CAI, en el RAIS si el afiliado fallece y no tiene beneficiarios de su pensión, forman parte de la masa sucesoral. En cambio, en el RPM esta posibilidad no existe, pues las cotizaciones efectuadas en vida del afiliado forman parte del fondo común pensional para cumplir con el principio de solidaridad, es decir jamás podrán ser parte de la sucesión.

Con respecto a la densidad del número de semanas cotizadas para pensionarse: en el RAIS, se mide por el capital acumulado en cuenta, el bono pensional si lo hubiere y los rendimientos obtenidos durante su permanencia, se le suman también los aportes voluntarios que pueda ahorrar el afiliado cotizante. En el RPM esto no es posible, puesto que debe cumplirse con el requisito mínimo de las 1.300 semanas y en este régimen no se admiten aportes voluntarios del afiliado.

Por último, en el RAIS sino se cumplen los requisitos para pensionarse, el afiliado tiene derecho a la devolución de saldos acumulados en su CAI, incluyendo los rendimientos y el bono pensional si lo hubiere. Al contrario, en el RPM se reconoce una indemnización sustitutiva que es muy inferior a una devolución de saldos.

Al demandante en el caso que nos ocupa, no solo se le realizaron proyecciones de su pensión al momento de la asesoría inicial, sino también en la reasesoría y al momento de solicitar su pensión de vejez.

**AL 6:** NO ES UN HECHO, es una pretensión, y como tal no estoy obligada a responder en este capítulo de Hechos.

**AL 7:** TAMPOCO ES UN HECHO, son elucubraciones del apoderado de la parte actora, a lo cual no estoy obligada a responder en este capítulo. Más sin embargo, es pertinente resaltar que la parte actora fue quien decidió trasladarse y permanecer en el RAIS durante más de 20 años, hasta llegar al punto de que en lugar de pedir trasladarse de Régimen y retornar al RPM, prefirió trasladarse de AFP y solicitar su pensión de vejez en el RAIS.

**AL 8:** Si bien es cierto que no existe documento escrito, también es cierto que atendiendo la normatividad legal vigente para la época en que la parte actora ejerció de manera libre y voluntaria

su derecho de afiliarse a uno u otro regimen pensional existente en Colombia, ha de resaltarse que no se exigía legalmente para ninguna Administradora de Fondos de Pensiones, el suministrar por escrito ningún tipo de cálculo financiero o proyección actuarial al potencial afiliado, y tampoco se exigía dejar por escrito el soporte de haber recibido la asesoría pensional; pues el proceso de asesoría era básicamente verbal.

**AL 9:** En lo que respecta a mi representada, NO ES CIERTO. A los potenciales afiliados se les realizaba y aún así se hace, una asesoría con total profesionalismo y ética. Es más, todos los asesores sin excepción contaban con un instructivo o guía que debían seguir para asesorar de forma clara y entendible a futuros clientes o clientes ya afiliados, dependiendo de su variación del perfil en el tiempo. Es decir que los asesores o ejecutivos de cuenta sí contaban con una capacitación e instructivo sobre qué tener en cuenta para cada cliente al momento de hablar con ellos, conocer su estado actual laboral, familiar y de ingresos, haciéndole conocer sus riesgos en el evento que existieran, y así poderlo orientar con el fin de que cada uno tomara su propia decisión de afiliarse o no. Este instructivo o guía era y sigue siendo de obligatorio cumplimiento. Los asesores o ejecutivos de cuenta entregaban explicaciones claras, comprensibles, tanto de la situación financiera actual como de la futura, teniendo siempre como horizonte la pensión de cada uno de los asesorados, pero decir ahora después de más de 20 años que no la asesoraron debidamente, no es concebible, pues su objetivo en este proceso es culpar a la AFP a la que ha estado afiliado y de la cual recibió permanentemente asesoría integral y profesional, pues la parte actora fue lo suficientemente ilustrada para que tomara su decisión de afiliarse y de permanecer en el RAIS de manera libre y consciente.

En este caso puntual, al demandante se le informó tal como lo dice la Ley 100 de 1993, que en el RAIS se puede pensionar a cualquier edad, siempre y cuando cumpla el requisito que la misma norma establece.

También se le informó, siendo que ésta era la mayor inquietud a quienes se les asesoraba, pues era lo que mas preguntaban, de que se podía RETRACTAR o devolverse al RPM.

Es decir que no puede pretender hoy, después de más de 25 años, manifestar que no se le informó.

Atendiendo la normatividad legal vigente para la época en que la parte actora ejerció de manera libre y voluntaria su derecho de afiliarse a uno u otro regimen pensional existente en Colombia, ha de resaltarse que no se exigía legalmente para ninguna Administradora de Fondos de Pensiones, el suministrar por escrito ningún tipo de cálculo financiero o proyección actuarial al potencial afiliado, y tampoco se exigía dejar por escrito el soporte de haber recibido la asesoría pensional; pues el proceso de asesoría era básicamente verbal.

Así mismo se le realizaron también proyecciones y como su nombre lo indica, simula, proyecta una expectativa respecto a un derecho que si bien es cierto, es fluctuante en cuanto al monto que debe reconocerse, esta suma solo será real al momento de la materialización del derecho, por ello no puede entenderse que el resultado del simulador pueda entenderse o constituirse como una obligación contractual para PROTECCION.

También vale la pena manifestar que las proyecciones que se realizan para calcular el momento en

el cual un afiliado podría acceder a pensión de vejez son MERAS APROXIMACIONES y en ningún momento establecen una fecha exacta, debido a que dependen de factores cambiantes constantemente.

Los factores que inciden en que las proyecciones son un aproximado y no dicten una fecha o valor exacto con el cual una persona se puede pensionar en el RAIS son:

- a. Los movimientos del mercado, ya que de ellos depende la mayor o menor rentabilidad del capital, lo cual va a generar cambios en el saldo de la cuenta de ahorro individual.
- b. Las cotizaciones realizadas, pues el cálculo se hace bajo el supuesto de que el afiliado va a seguir cotizado sobre la misma base salarial que tiene en el momento de la proyección, hasta la fecha en que recibiría la pensión.
- c. La fidelidad en las cotizaciones, dado que el cálculo se realiza tomando como base que los afiliados continúen cotizando de manera ininterrumpida hasta el momento en que desee pensionarse y en ese caso la fidelidad es del 100%. Pero si presenta interrupciones la fidelidad disminuye lo cual afecta el valor de la proyección.
- d. También y muy importante es que se debe tener en cuenta los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia en caso de fallecimiento, ya que a ellos se les deberá continuar pagando la pensión (pensión de sobrevivientes).
- e. Importantísimo, la modalidad de pensión. Dependiendo de la modalidad se determinarán factores como la posibilidad de negociar el bono pensional, si hay lugar a ello, o el capital requerido para a una prestación.

Y en el caso de que el demandante no tenga en su cuenta de ahorro individual el capital suficiente para financiar la pensión de vejez y si cumple los requisitos que la ley exige, será entonces beneficiaria de la Garantía de Pensión mínima, creado por la Ley 100 de 1993 y que establece: “los afiliados que a los 62 años si son hombres y 57 si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente ley, y hubiesen cotizado por lo menos 1.150 semanas, tendrán derecho a que el Gobierno, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión”.

De otro lado, es muy importante advertir que a pesar de que las demandas de nulidad solo están basadas en el monto de la pensión, los dos regímenes pensionales no pueden ser comparados únicamente por el monto de la pensión que le pueda corresponder al afiliado en uno u otro escenario, sobre todo porque el de Ahorro Individual tiene otras bondades que no necesariamente representan un beneficio inmediato sino futuro. Es así como el Sistema General de Pensiones cuenta con dos regímenes excluyentes entre sí creados por el Legislador y por lo tanto no se puede olvidar las características propias de cada una, resaltando las siguientes:

En el RAIS, el afiliado posee una cuenta propia de ahorro individual que forma parte de su patrimonio, mientras que en el RPM no existe patrimonio individualizado de los cotizantes ya que los aportes van a un fondo común pensional público para financiar las pensiones de todos los afiliados de ese régimen.

En cuanto a obtener excedentes de libre disponibilidad, en el RAIS es una característica que consiste en que el afiliado al momento de pensionarse, puede escoger por recibir una pensión de

vejez más baja a cambio de obtener que de su cuenta individual se le entregue un excedente que se liquida con base en un cálculo actuarial que tiene en cuenta el IBL a esa fecha, mientras que en el RPM esto no es posible porque las cotizaciones van a un fondo común pensional para financiar todas las pensiones de sus afiliados.

Sobre pensión anticipada de vejez: En el RAIS, siempre y cuando se cumplan los requisitos que la ley exige, es posible, mientras que en el RPM deben cumplirse obligatoriamente la edad pensional que la ley ordena.

En cuanto a los ahorros que se encuentran en la CAI, en el RAIS si el afiliado fallece y no tiene beneficiarios de su pensión, forman parte de la masa sucesoral. En cambio, en el RPM esta posibilidad no existe, pues las cotizaciones efectuadas en vida del afiliado forman parte del fondo común pensional para cumplir con el principio de solidaridad, es decir jamás podrán ser parte de la sucesión.

Con respecto a la densidad del número de semanas cotizadas para pensionarse: en el RAIS, se mide por el capital acumulado en cuenta, el bono pensional si lo hubiere y los rendimientos obtenidos durante su permanencia, se le suman también los aportes voluntarios que pueda ahorrar el afiliado cotizante. En el RPM esto no es posible, puesto que debe cumplirse con el requisito mínimo de las 1.300 semanas y en este régimen no se admiten aportes voluntarios del afiliado.

Por último, en el RAIS sino se cumplen los requisitos para pensionarse, el afiliado tiene derecho a la devolución de saldos acumulados en su CAI, incluyendo los rendimientos y el bono pensional si lo hubiere. Al contrario, en el RPM se reconoce una indemnización sustitutiva que es muy inferior a una devolución de saldos.

Al demandante en el caso que nos ocupa, no solo se le realizaron proyecciones de su pensión al momento de la asesoría inicial, sino también en la reasesoría y al momento de solicitar su pensión de vejez.

**AL 10:** ES CIERTO, afiliación que cumplió con todos los requisitos y formalidades legales y es de resaltar que dicha afiliación la realizó por su propia voluntad en septiembre de 2009, es decir que cuando ya se encontraba inmerso en la prohibición legal de trasladarse al RPM.

**AL 11:** ES CIERTO, pero se encuentra pensionado bajo las normas del RAIS

**AL 12:** ES CIERTO, razón por la cual no se podrá declarar la nulidad del traslado por tener la calidad de pensionado.

Y al respecto es necesario reiterar que no es factible que se declare la nulidad por cuanto el demandante tiene la calidad de pensionado y al respecto la reciente sentencia SL 373 de 2021 con ponencia de la Magistrada doctora Gloria Cecilia Dueñas, de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en un asunto de pensionado bajo la modalidad de retiro programado, sostiene:

*“Esta circunstancia conduce a la Corte a interrogarse si es posible, bajo el manto de la ineficacia*



*de la afiliación, que el demandante pensionado del régimen de ahorro individual con solidaridad, vuelva al mismo estado en el que se encontraba antes de su traslado al RPMPD.*

*Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante), lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un status jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones.*

*Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que reversar esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el capital habría perdido su integridad y, por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública.*

*Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata.*

*Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AF. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de las opciones pensionales intervienen en la administración y gestión del riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado.*

*Por lo tanto, no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida.*

*Si se trata de una garantía de pensión mínima, volver las cosas a su estado anterior, implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía. Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requería la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defiende los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono.*

*Ni que decir cuando el capital se ha desfinanciado, especialmente cuando el afiliado decide pensionarse anticipadamente, o de aquellos casos en que ha optado por los excedentes de libre disponibilidad (art. 85 de la Ley 100 de 1993), en virtud de los cuales recibe la devolución de una parte de su capital ahorrado. En esta hipótesis, los recursos, ya desgastados, inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.*

*La Corte podrá discurrir y profundizar en muchas más situaciones problemáticas que generaría la invalidación del estado de pensionado. No obstante, considera que los ejemplos citados son suficientes para demostrar el argumento según el cual la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones.*

...

***Finalmente, de acuerdo con lo expuesto, la Corte abandona el criterio sentado en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado.*** (El resaltado es mío).

**AL 13:** NO ME CONSTA, por no estar referido a mi representada.

**AL 14:** ES CIERTO, solicitudes totalmente improcedentes por cuanto para la época de afiliación d la parte actora no era obligación para ninguna AFP entregar por escrito la asesoría brindada, a pesar de habersele suministrado toda la información en forma clara, veraz y oportuna la cual fue entendida totalmente por el demandante.

**AL 15:** NO ME CONSTA, por no estar referida a mi representada.

**AL 16:** NO ME CONSTA, por no estar referido a mi representada.

**AL 17:** NO ME CONSTA, por no estar referido a mi representada.

**AL 18:** ES CIERTO, teniendo en cuenta lo manifestado al contestar el hecho 14, más aún si mi representada no está facultada para declarar ineficacias o nulidades de actos que se presumen válidos.

**AL 19:** NO ME CONSTA por no estar referido a mi representada.

**AL 20:** ES CIERTO y la liquidación de su pensión se realizó de acuerdo a las normas que regulan el Régimen Pensional escogido por el demandante, es decir el RAIS.

**AL 21:** NO ES UN HECHO, son suposiciones de cálculos que manifiesta la parte actora sobre los cuales mi representada no ha tenido alguna injerencia.

**AL 22:** ES CIERTO, liquidación basada sobre las normas que establece el RAIS, lo cierto es que el



demandante se encuentra pensionado desde junio 1 de 2017 y cualquier acción legal está más que prescrita, por lo tanto no pueden prosperar sus pretensiones.

**AL 23:** NO ES UN HECHO, son suposiciones de cálculos que manifiesta la parte actora sobre los cuales mi representada no ha tenido alguna injerencia.

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO Y RAZONES DE LA DEFENSA**

### **A. MARCO NORMATIVO**

Referente a la afiliación al Sistema General de Pensiones, la selección de los regímenes que lo conforman:

El artículo 12 de la Ley 100 de 1993, señala: *“El Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten, a saber:*

- a. Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.*
- b. Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.”*

El artículo 13 de la Ley 100 de 1993, como se encontraba vigente al momento de verificarse el traslado de régimen de la actora, señalaba:

*“a -...*

*b-. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado...*

*c-. Los afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de las pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, conforme a lo dispuesto en la presente ley;*

*d-. La afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen en esta ley;*

*e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada tres (3) años, contados a partir de la selección inicial, en la forma que señale el gobierno nacional...”*

El artículo de la Ley 100 de 1993, actualmente señala: *“El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:*

- a. <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes;*
- b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al*

*momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley ...*

*e. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; ...*

*El artículo 59 de la Ley 100 de 1993, consagra: “ El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es el conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados, de acuerdo con lo previsto en este Título.*

*Este régimen está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de pensión mínima y aportes al Fondo de Solidaridad, y propende por la competencia entre las diferentes entidades administradoras del sector privado, sector público y sector social solidario, que libremente escojan los afiliados.*

*<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 1328 de 2009. Entra a regir el 15 de septiembre de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> En este régimen las administradoras ofrecerán diferentes Fondos de Pensiones, esquema “Multifondos”, para que los afiliados una vez informados elijan aquellos que se ajusten en mejor forma a sus edades y perfiles de riesgo, de manera que con una adecuada conformación de la cuenta individual y una eficiente gestión de los recursos por parte de la administradora, se procure el mejor retorno posible al final del periodo de acumulación de aportes o hasta cuando el afiliado y/o sus beneficiarios tengan derecho a la pensión bajo la modalidad de retiro programado, si es del caso.”*

*El artículo 61 de la ley 100 de 1993, respecto de las personas excluidas del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, determina: “Están excluidos del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad:*

*a. Los pensionados por invalidez por el Instituto de Seguros Sociales o por cualquier fondo, caja o entidad del sector público.*

*b. Las personas que al entrar en vigencia el sistema tuvieran cincuenta y cinco (55) años o más de edad, si son hombres, o cincuenta (50) años o más de edad, si son mujeres, salvo que decidan cotizar por lo menos quinientas (500) semanas en el nuevo régimen, caso en el cual será obligatorio para el empleador efectuar los aportes correspondientes...”*

*El artículo 11 del decreto 692 de 1994, consagra:*

*Diligenciamiento de la selección y vinculación. La selección del régimen implica la aceptación de las condiciones propias de éste, para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que haya lugar.*

*La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos en los artículos anteriores es libre y voluntaria por parte del afiliado....*

*Quienes decidan afiliarse voluntariamente al sistema, manifestarán su decisión al momento de vincularse a una determinada administradora...”*

El artículo 3°. del Decreto 1161 de 1994, indica:

*“Traslado de regímenes. Se entenderá permitido el retracto del afiliado en todos los casos de selección con el objeto de proteger la libertad de escogencia dentro del Sistema General de Pensiones, de una administradora de cualquiera de los regímenes o de un plan o fondo de pensiones, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual aquel haya manifestado por escrito la correspondiente selección...”*

El artículo 1 del decreto 3800 de 2003, señala:

*Artículo 1. Traslado de Régimen de Personas que les falte menos de diez años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. De conformidad con lo señalado en el artículo 2 de la ley 797 de 2003, las personas a las que a 28 de enero de 2004, les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán trasladarse por una única vez entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad hasta dicha fecha”*

Respecto a la nulidad pretendida en la demanda:

El artículo 899 del Código Civil, dispone que “será nulo absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos:

1. Cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa;
2. Cuando tenga causa u objeto ilícitos, y
3. Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz.”

El artículo 1508 del Código Civil, reza: “Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son el error, la fuerza y el dolo”

El artículo 1741 del Código Civil, dispone: “La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.

*Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces.*

*Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato.”*

El artículo 1742 del Código Civil, señala: “... Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria”

El artículo 1750 del Código de Civil, dispone: “El plazo para pedir la rescisión durará cuatro años.

*Este cuatrienio se contará, en el caso de violencia, desde el día en que ésta hubiera cesado; **en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato....**” (Negrillas y subrayas fuera de texto)*

El artículo 1752 del Código Civil, consagra: “La ratificación necesaria para sanear la nulidad cuando el vicio del contrato es susceptible de este remedio, puede ser expresa o tácita”

El artículo 1o. de la Ley 791 de 2002, señala: “Redúzcase a diez (10) años el término de todos <sic> las prescripciones veintenarias, establecidas en el Código Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva de dominio, la extintiva, la de petición de herencia, la de saneamiento de nulidades absolutas”. El subrayado es nuestro.

El Art. 107 de la Ley 100 de 1993, establece:

**“Artículo 107. Cambio de Plan de Capitalización o de Pensiones y de Entidades administradoras :**

**Todo afiliado al régimen y que no haya adquirido la calidad de pensionado, podrá transferir voluntariamente el valor de su cuenta individual de ahorro pensional a otro plan de capitalización o de pensiones autorizado, o trasladarse a otra entidad administradora”.**

## **B. MARCO JURISPRUDENCIAL**

- 1.La Sala Laboral al estudiar el caso de nulidad de un pensionado, en sentencia SL 373 DE 2021 con ponencia de la Magistrada doctora Gloria Cecilia Dueñas, de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en un asunto de pensionado bajo la modalidad de retiro programado, sostiene:

*“Esta circunstancia conduce a la Corte a interrogarse si es posible, bajo el manto de la ineficacia de la afiliación, que el demandante pensionado del régimen de ahorro individual con solidaridad, vuelva al mismo estado en el que se encontraba antes de su traslado al RPMPD.*

*Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante), lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un status jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la*

*calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones.*

*Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que reversar esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el capital habría perdido su integridad y, por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública.*

*Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata.*

*Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AF. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de las opciones pensionales intervienen en la administración y gestión del riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado.*

*Por lo tanto, no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida.*

*Si se trata de una garantía de pensión mínima, volver las cosas a su estado anterior, implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía. Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requeriría la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defienda los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono.*

*Ni que decir cuando el capital se ha desfinanciado, especialmente cuando el afiliado decide pensionarse anticipadamente, o de aquellos casos en que ha optado por los excedentes de libre disponibilidad (art. 85 de la Ley 100 de 1993), en virtud de los cuales recibe la devolución de una parte de su capital ahorrado. En esta hipótesis, los recursos, ya desgastados, inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.*

*La Corte podrá discurrir y profundizar en muchas más situaciones problemáticas que generaría la*

*invalidación del estado de pensionado. No obstante, considera que los ejemplos citados son suficientes para demostrar el argumento según el cual la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones.*

...

***Finalmente, de acuerdo con lo expuesto, la Corte abandona el criterio sentado en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado.*** (El resaltado es mío).

2. SL 053 de 2022, que reitera lo sostenido en la SL 373 de 2021:

*“Ninguna discusión se presenta en cuanto a que Roberto Cesáreo José Francisco Ceballos Restrepo disfruta de una pensión anticipada de vejez en la modalidad de retiro programando desde el año 2002, a cargo de Protección SA. La anterior circunstancia conduce a la Sala a examinar si es posible, bajo el manto de la ineficacia de la afiliación, que el demandante pensionado a cargo del régimen de ahorro individual con solidaridad regrese al mismo estado en el que se encontraba en el año 1995, cuando se trasladó del régimen de prima media con prestación definida.*

*Pues bien, para efectos de dilucidar el anterior planteamiento conviene recordar que en la sentencia CSJ SL373-2021, esta Sala abandonó el viejo criterio plasmado en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989 y respondió el referido cuestionamiento de manera negativa. Adoctrinó en esa ocasión, que aun cuando la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales implica dejar sin piso todos los actos derivados del mismo, en el caso de los pensionados ello no es posible dada la existencia de una situación consolidada, cuyas consecuencias no pueden retrotraerse.*

*En el nuevo criterio, esta Corporación específicamente, afirmó:*

*Si bien por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante)[1], lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones:*

*Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que reversar esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el*



*capital habría perdido su integridad y, por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública.*

*Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata.*

*Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AFP. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de opciones pensionales intervienen en la administración y gestión del riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado.*

*Por lo tanto, no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida.*

*Si se trata de una garantía de pensión mínima, volver las cosas a su estado anterior, implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía. Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requería la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defienda los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono.*

*Ni que decir cuando el capital se ha desfinanciado, especialmente cuando el afiliado decide pensionarse anticipadamente, o de aquellos casos en que ha optado por los excedentes de libre disponibilidad (art. 85 de la Ley 100 de 1993), en virtud de los cuales recibe la devolución de una parte de su capital ahorrado. En esta hipótesis, los recursos, ya desgastados, inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.*

*La Corte podría discurrir y profundizar en muchas más situaciones problemáticas que generaría la invalidación del estado de pensionado. No obstante, considera que los ejemplos citados son suficientes para demostrar el argumento según el cual la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un*



*gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones.*

*En consecuencia y como en el presente asunto, no se discute que Protección S.A. le reconoció a Ceballos Restrepo una prestación de vejez en la modalidad de retiro programado desde el mes de octubre de 2002, tiene el estatus jurídico de pensionado, y, en consecuencia, no es factible revertir dicha situación.”*

### **3.DENTRO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA SOLICITA EL INDEMNIZACION PLENA DE PERJUICIOS:**

Al respecto esta misma sentencia SL 053 de 2022, sostiene:

*“Lo anterior, no significa que el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener su reparación. Es un principio general del derecho aquel según el cual quien comete un daño por culpa, está obligado a repararlo (art. 2341 CC). Por consiguiente, si un pensionado considera que la administradora incumplió su deber de información (culpa) y, por ello, sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora.*

*El artículo 16 de la Ley 446 de 1998 consagra el principio de reparación integral en la valoración de los daños. Este principio conmina al juez a valorar la totalidad de los daños irrogados a la víctima y en función de esta apreciación, adoptar las medidas compensatorias que juzgue conveniente según la situación particular del afectado. Es decir, el juez, en vista a reparar integralmente los perjuicios ocasionados, debe explorar y utilizar todas aquellas medidas que considere necesarias para el pleno y satisfactorio restablecimiento de los derechos conculcados.*

*Lo anterior permite colegir que en el sub lite, ante la falta de prosperidad de la ineficacia del traslado de régimen pensional habría lugar, dada la condición de pensionado del promotor del juicio, a estudiar e imponer la indemnización plena de perjuicios que desde el libelo inicial se reclamó, lo que conlleva que el cargo sea fundado; no obstante, en las condiciones del informativo la Sala llegaría a la misma conclusión que el ad quem como pasa a analizarse.*

*El precepto normativo llamado a regir la indemnización plena de perjuicios solicitada, como lo señalara esta Corte, es el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que reza:*

**ARTICULO 16. VALORACION DE DAÑOS.** *Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.*

*No obstante, «En la medida que el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, el término de prescripción de la acción debe contarse desde este momento» (CSJ SL373-2021), lo que lleva a colegir que en el presente asunto aquel se superó con creces como lo sostuvieron las demandadas al proponer el correspondiente medio exceptivo, pues la pensión anticipada de vejez que se le reconoció a Roberto Cesáreo José*

*Francisco Ceballos Restrepo lo fue a partir del 5 de abril de 2002 (f.º 31-32) y la presente acción judicial tan solo se ejerció el 24 de enero de 2018 como da cuenta el acta de reparto visible al anverso de la carátula final del expediente, esto es, superado ampliamente el término trienal contemplado en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, razón por la cual no resulta procedente su imposición.*

*Por lo anterior, el cargo, aunque fundado, no prospera.”*

**4. SENTENCIA SL 1956 de agosto de 2023**, que sostiene que la “Imprescritibilidad del Derecho Pensional no se aplica a la indemnización de perjuicios por el daño causado con ocasión del traslado de régimen.

**5.SENTENCIA PROFERIDA POR LA SALA ESPECIALIZADA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR JUDICIAL DE MEDELLIN, DEL 14 DE AGOSTO DE 2019 CON PONENCIA DEL MAGISTRADO ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, AL DECIDIR RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL PROCESO CON RADICACIÓN 2015-01295, SEÑALA:**

“Es plausible que la diferenciación de las calidades de afiliado y pensionado a partir de los argumentos que se han expuesto y de toda la legislación que claramente los diferencia, verbi gratia, los artículos 13, literales b), e) y d), 87, 115 y 117 de la Ley 100 de 1993, permita apartarse del precedente de la Sala Laboral de la Corte sobre ineficacia de la afiliación, entendiendo que se está ante universo fáctico diverso cuando se trata de ciudadanos que ya se han pensionado.

Este Tribunal, a través de su Sala Primera de Decisión Laboral, con ponencia del Magistrado Hugo Alexander Bedoya Díaz, realizó una fértil distinción entre el momento de la afiliación y aquel en que se empieza a disfrutar la pensión, que refuerza la razonabilidad del enfoque que en el caso que nos ocupa. Dice así la providencia, con radicado 00873, proferida el 18 de septiembre de 2018, que constituye un comienzo de precedente horizontal:

Ahora, retrotrayéndonos al estudio de la improcedencia de que se declare la inexistencia del traslado en este caso en particular, la sala se remite a la sentencia SL17595-2017 con radicado 46.292 MP Dr. Fernando Castillo Cadena en donde en forma concreta se dijo “... Así, en el asunto bajo escrutinio, brilla por su ausencia, los deberes y obligaciones que la jurisprudencia ha trazado en aquellos casos de traslado entre regímenes, entre los cuales se destaca: (i) la información que comprende todas las etapas del proceso, **desde la antesala de la afiliación hasta** la determinación de las condiciones para el **disfrute pensional; (...)**”, entendiéndose con este último aparte de la providencia que si la información exigida data desde antes de la afiliación y hasta las **condiciones del disfrute de la pensión**, ello implica, que una vez reconocida la pensión de vejez esa falta de información se entiende superada con la celebración del nuevo acto jurídico adelantado por la afiliada y que corresponde a la solicitud de la pensión de vejez a la sociedad Porvenir S.A y al reconocimiento y pago de la prestación económica, pues solo tenía la posibilidad de alegar la falta de información previo al disfrute de la prestación económica y no con posterioridad a ella, como ocurre en este evento.

Por último, ha de reiterarse por esta Sala que sostener la tesis de la ineficacia de la afiliación para pensionados del régimen de ahorro individual es un camino que puede conducir a situaciones del todo insostenibles, por cuanto la consolidación de ese nuevo estatus supone en muchos casos la participación de terceros de buena fe, como cuando se ha optado por pensionarse bajo la modalidad de renta vitalicia y se ha contratado con una aseguradora su pago. Las palabras de la Corte Constitucional, en la mentada sentencia C-841 de 2003, acuden con autoridad para esclarecer ese *reductio ad absurdum* :

...

Por ello, resulta efectivamente conducente para garantizar la sostenibilidad del sistema y servicios administrativos y financieros adecuados, restringir la posibilidad de traslado.

Valga también mencionar además las situaciones de quienes se han pensionado anticipadamente y han negociado su bono pensional antes de la fecha de redención normal. Ese tercero inversionista que se ha beneficiado en el mercado de valores, mediante un negocio totalmente legítimo, querrá una respuesta cuando la justicia laboral disponga la anulación de esa transacción.”

...”

3. La Corte Constitucional al declarar exequible el artículo 1742 del Código Civil, mediante sentencia C-597 de 1998, con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, dijo:

**“... 2. La nulidad en el Código Civil colombiano**

*De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1740 del Código Civil "Es nulo todo acto o contrato al que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa".*

*La nulidad, según la doctrina prevalente, constituye un castigo o sanción civil que se impone por la omisión de los requisitos que la ley considera indispensables para la validez de los actos o contratos. La nulidad se identifica con la invalidez del acto o contrato.*

*La nulidad puede ser absoluta o relativa. La primera se dirige a proteger el interés público o general de la sociedad, pues está destinada a castigar lo ilícito, es decir, lo contrario a la ley, las buenas costumbres y el orden público. La segunda protege el interés privado o particular. Sin embargo, es posible encontrar casos en los que los dos intereses -privado y público- se encuentran comprometidos, vr.gr. cuando se trata de la defensa de los incapaces.*

**3. Causales de nulidad**

*Las causales que dan origen a la nulidad se encuentran descritas en el artículo 1741 del Código Civil, así:*

*"La nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.*

*Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato."*

*La nulidad absoluta se produce entonces, cuando existe: 1. objeto ilícito, 2. causa ilícita, 3. falta de solemnidades o requisitos esenciales para la validez del acto o contrato de acuerdo con su naturaleza, y 4. incapacidad absoluta. La nulidad relativa, por causas distintas a éstas.*

#### **4. Quiénes pueden solicitar la nulidad**

*De acuerdo con el artículo 1742 del Código Civil, la nulidad absoluta puede solicitarla cualquier persona que tenga algún interés legítimo y el Ministerio Público, en este último caso, únicamente en aras de proteger la moral y la ley. No obstante, la nulidad también debe ser declarada de oficio por el juez del conocimiento, cuando "aparezca de manifiesto" en el acto o contrato, esto es, cuando es ostensible, notoria o evidente.*

*La nulidad relativa, por el contrario, no puede ser declarada de oficio por el juez, ni tampoco a solicitud del Ministerio Público en el solo interés de la ley, sino únicamente a petición de parte. Y solamente puede alegarse por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o cesionarios. (art. 1743 C.C.)*

#### **5. El saneamiento de la nulidad**

*La nulidad absoluta, por mandato expreso del artículo 1742 del Código Civil, cuando no es generada por objeto y causa ilícitos puede sanearse por la ratificación de las partes. Y en ambos casos, es decir, exista o no objeto o causa ilícitos por prescripción extraordinaria.*

*La nulidad relativa también puede sanearse por los mismos medios, es decir, por ratificación de las partes y por el transcurso del tiempo -por regla general 4 años-, los cuales se aumentan en algunos casos, como lo establece el artículo 1750 del Código Civil.*

#### **6. La disposición acusada**

*El artículo 1742 del Código Civil, parcialmente demandado, además de señalar los sujetos que pueden pedir la declaración de nulidad absoluta y facultar al juez para hacerlo de oficio cuando ésta sea manifiesta, establece en la parte final: "Cuando no sea generada (la nulidad absoluta) por objeto o causa ilícitos ésta podrá ser saneada por ratificación y en todo caso por prescripción extraordinaria", siendo la expresión subrayada la acusada, porque en criterio de la actora la causa ilícita no puede ser saneada nunca, por atentar contra la moral social.*

*En primer término, es preciso aclarar a quien interviene en nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho, que la norma objeto de demanda no prohíbe el saneamiento de la nulidad absoluta cuando ésta es generada por objeto o causa ilícita. Por el contrario, mediante la expresión acusada*

se autoriza su saneamiento siempre y cuando haya transcurrido un período determinado, que el legislador ha fijado en 20 años (ley 50/1936).<sup>1</sup>

En efecto: según el precepto acusado cuando la nulidad absoluta no es producida por objeto o causa ilícitos puede sanearse por ratificación de las partes "y en todo caso por prescripción extraordinaria". La expresión "y en todo caso" se refiere no sólo a las nulidades producidas por causas diferentes a objeto o causa ilícitos sino también a las generadas por éstos; pues si el legislador hubiere querido excluir del saneamiento los actos o contratos cuyo objeto o causa es ilícito, bien hubiera podido omitir dicha frase y decir expresamente "y por prescripción extintiva", pero ello no ocurrió así.

El Código Civil define la prescripción de la siguiente manera: "La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.

Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción". (art. 2512 C.C.).

La prescripción puede ser adquisitiva, liberatoria o extintiva de derechos y acciones. En el presente caso la Corte sólo se referirá a la extintiva de la acción de nulidad absoluta, por ser ésta la de interés para resolver la demanda. No sin antes recordar que "La prescripción que extingue las acciones o derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta ese tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible." (art. 2535 C.C.)

En este orden de ideas, la prescripción contenida en la norma acusada es la extintiva de la acción de nulidad absoluta, es decir, que transcurrido el plazo de 20 años, las personas a quienes el legislador les concedía facultad para incoarla ya no podrán hacerlo, ni el juez decretarla de oficio, pues ha precluido el término para ello y, por consiguiente, el acto que contenía el vicio queda purgado, esto es, saneado por ese aspecto.

Ahora bien: que la nulidad absoluta originada por causa ilícita no puede ser saneada jamás, según la actora, es un punto de vista que nace con el viejo principio de derecho romano que consideraba que "lo que es inicialmente vicioso no puede convalecer por el transcurso del tiempo". Sin embargo, este criterio fue modificado en la época postclásica y definitivamente superado en el derecho justiniano, cuando se institucionalizó la prescripción extintiva de 40 años, para cualquier tipo de obligación.

La prescripción, como es sabido, se instituyó básicamente con fundamento en razones de seguridad jurídica y orden público.

En lo que respecta al saneamiento de la nulidad absoluta por el transcurso del tiempo son conocidos los argumentos expuestos por la doctrina prevalente para sustentarlo. Pueden citarse a título de ejemplo: "...la ley ha tenido que decidir qué es más conveniente para la salvaguardia de



*los intereses generales: si permitir destruir una situación ya establecida, aún después de 15 años, o dejarla subsistente, considerándola saneada del vicio que la afectaba. Desde todo punto de vista es más justo y conveniente para los intereses de todos esta última solución, porque son mayores los trastornos que se producirían al anular un acto jurídico pasados 15 años de su celebración, que considerarlo saneado y válido después de ese plazo, aún cuando en el se contengan disposiciones contrarias al orden público, a la moral o a la ley misma.*

*Por tal motivo, y a pesar de su repugnancia para estimar consolidada una situación anormal, el Código Civil ha tenido que reconocer que pasado el plazo de 15 años, la situación ilícita, anormal o ilegal ha perdido mucho de su vicio reprochable, máxime si se considera que durante ese tiempo no se ha solicitado la declaración de nulidad absoluta por ninguna de las muchas personas que tienen derecho a hacerlo. En consecuencia, tanto para consolidar una situación anormal que se ha mantenido durante tanto tiempo, como para sancionar la negligencia de las personas que están facultadas para pedir la nulidad absoluta, el Código Civil prohíbe que pasado el plazo de 15 años se la pueda alegar. Jurídicamente se trata de una prescripción extintiva de la acción de nulidad....."*

*Los hermanos Mazeaud y Planiol y Ripert arguyen de este modo:*

*"El fundamento de la institución de la prescripción (de la acción de nulidad) estriba en la idea de que el tiempo, en interés de la paz social, debe subsanar las situaciones irregulares y que hay que suprimir las dificultades probatorias de los litigios de origen demasiado remoto.*

*...cuando se trata de una nulidad de orden público, desvirtuar la excepción sería igual que permitir el concurso de la justicia en la realización de un acto peligroso para el bienestar común; esto sería más grave que echar en olvido el origen de un estado de hecho mantenido por mucho tiempo."*

*Josserand considera que "La prescripción llamada extintiva o liberatoria realiza la extinción de un derecho, especialmente de un crédito, por el solo transcurso de cierto plazo; el tiempo, a cuyas manos todo perece, que gasta las instituciones, las leyes y las palabras, echa el olvido sobre los derechos, que caen también en desuso cuando no han sido ejercitados durante un tiempo fijado por la ley; su no utilización conduce a su abolición."*

*Así las cosas, entra la Corte a resolver si la prescripción de la acción de nulidad absoluta y, por consiguiente, su saneamiento, cuando es generada en objeto o causa ilícita infringe el ordenamiento superior.*

*En primer término, es pertinente anotar que en relación con este tema la Constitución solamente establece la imprescriptibilidad de las penas y medidas de seguridad (art. 29): "En ningún caso podrá haber prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad **imprescriptibles**"; y la de algunos bienes: "Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, **imprescriptibles** e inembargables" (art. 63)*

*Siendo así, corresponde al legislador en ejercicio de la libre configuración normativa, regular las relaciones jurídicas y, obviamente, determinar cuáles son los requisitos necesarios para la validez de los actos y contratos y, por consiguiente, los aspectos atinentes a la nulidad, su saneamiento, la*

prescripción, etc. Sobre este mismo punto dijo la Corte en pronunciamiento anterior, que hoy reitera:

*"Todo cuanto concierne a los procedimientos judiciales, a menos que lo haya establecido directamente la Constitución, corresponde al legislador, como surge con claridad de los artículos 29, 228, 229 y 230 de aquélla, entre otros. Por supuesto, es precisamente el legislador el llamado a definir los hechos y circunstancias que dan lugar a las nulidades y también el encargado de estatuir lo relativo a las posibilidades de saneamiento o convalidación de actos o etapas procesales, la manera y términos en que pueden obtenerse."*

*De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1519 del Código Civil, hay **objeto ilícito** "en todo lo que contraviene al derecho público de la Nación. Así, la promesa de someterse en la República a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del objeto". También "Hay objeto ilícito en la enajenación: 1. de las cosas que no están en el comercio, 2. de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona, 3. de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello." (art. 1521 C.C.)*

*En cuanto a la **causa ilícita** el artículo 1524 se refiere a ella así:*

*"....Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por **causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público.***

*Así: la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita."*

*El objeto y la causa lícitos han sido consagrados por el legislador como requisitos necesarios para la validez de los actos o contratos, como se lee en el artículo 1502 del Código Civil, que establece:*

*"Para que una persona se obligue a otro por un acto o declaración de voluntad, es necesario: 1. Que sea legalmente capaz; 2. Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3. **Que recaiga sobre un objeto lícito**; 4. **Que tenga una causa lícita....."***

*La demandante fundamentada en la sentencia C-374/97 mediante la cual se declaró inexecutable la prescripción de la acción de extinción del dominio por cuanto permitía el saneamiento de "las fortunas ilícitas", lo cual contrariaba la Constitución, ya que "los vicios que afectan el patrimonio mal habido jamás pueden sanearse, y menos todavía inhibir al Estado para perseguir los bienes mal adquiridos", solicita que se declare inexecutable el aparte demandado del artículo 1742 del Código Civil, por violar la moral social, contenida en el artículo 34 de la Carta.*

*La prescripción extraordinaria de la nulidad absoluta generada por objeto o causa ilícitos, no es nueva en nuestro ordenamiento, pues el artículo 1742 del Código Civil tal como aparecía antes de expedirse la ley 50 de 1936, que lo modificó, la autorizaba a los treinta (30) años. Con la ley 50 de 1936 -artículo 2o. parcialmente acusado-, se autoriza el saneamiento de la nulidad absoluta cuando no es generada en objeto o causa ilícita por ratificación de las partes y, en ambos casos por prescripción extraordinaria, la que fija en 20 años (art. 1o. ibidem), como se expresó en párrafos anteriores.*



*Ha sido universalmente aceptado que la causa que justifica el instituto de la prescripción de la acción, es sin duda, la seguridad jurídica y el orden público, pues el interés general de la sociedad exige que haya certeza y estabilidad en las relaciones jurídicas. Sin embargo, también se afirma que es la lógica consecuencia de la negligencia o inactividad de quien deba hacerla valer oportunamente, esto es, dentro del tiempo y condiciones que consagre la ley, "porque las acciones duran mientras el derecho a la tutela jurídica no haya perecido y ese derecho, generalmente, subsiste en tanto y en cuanto no se haya perdido por la inactividad del titular."*

*Savigny sostiene que "El interés social u orden público es la nota que caracteriza al instituto de la prescripción. Las normas que conducen a la pérdida del derecho no ejercido por el transcurso del tiempo, no pueden quedar desvirtuadas por convenciones que ofendan el espíritu de la legislación, inherentes a aquellos preceptos que persiguen la seguridad jurídica de la obligación; a pesar de satisfacer esto la prestación objeto de un nexo extinguido, no por ello debe aprehenderse esa conducta como una desviación a esa esencia del orden público de la prescripción, exista o no el deber de conciencia."*

*La prescripción extraordinaria de la acción de nulidad absoluta por el transcurso de 20 años, como ya se dijo, impide que después de vencido ese plazo, las personas que tenían interés legítimo para incoarla lo puedan hacer, quedando de esta manera saneado el vicio de que adolecía el acto o contrato, así éste sea ilícito. Asunto que bien puede regular el legislador dentro de su facultad para reglamentar las relaciones jurídicas y adoptar mecanismos enderezados a solucionar los conflictos que de ellas se deriven, **siempre y cuando al hacerlo no contraría ningún precepto constitucional**, lo cual se determinará en seguida.*

*Quizás resulte pertinente, en este punto, traer a colación un pasaje esclarecedor de Alessandri: "(...) la ley ha tenido que conciliar la necesidad de sancionar las infracciones a ella con el interés público, el cual exige cierta estabilidad en las situaciones jurídicas, porque derechos inciertos impiden el normal desarrollo de las actividades de una colectividad. Y por muy inconveniente que sea mantener un acto o contrato que adolece de nulidad absoluta, hay que reconocer que no es tampoco conveniente dejar en suspenso ese acto indefinidamente, como ocurriría si pudiese ser anulado en cualquiera época después de su celebración.*

*Por tal motivo, la ley, reconociendo que es menos peligroso consolidar una situación jurídica anormal derivada de un acto o contrato ilícito, inmoral o contrario a sus disposiciones fundamentales, que dejaría en suspenso por tiempo indefinido, porque es preferible la estabilidad que la incertidumbre de los derechos, ha señalado un plazo, transcurrido el cual la nulidad absoluta se sana, es decir, el acto o contrato viciado se convierte en plenamente eficaz e inatacable, considerándosele como purgado del vicio o defecto de que adoleció. El plazo de quince años es el máximo que contempla nuestro Código Civil para la consolidación definitiva de todo derecho o situación incierta, y por eso lo ha adoptado también para el saneamiento de la nulidad absoluta."*

*En él se relieves, con toda nitidez, el conflicto que enfrenta el legislador (cualquier legislador, en principio) al instituir la prescripción extintiva: entre persistir ab aeternum en sancionar una conducta jurídicamente reprochable, en salvaguarda del ordenamiento y la moral social que él*

*ampara, y cubrirla con un manto de olvido en aras de la paz y la seguridad, bienes sociales cuya tutela también es de su incumbencia.*

*Lo que hace el derecho objetivo al recoger la prescripción extintiva no es otra cosa que asociar consecuencias jurídicas a un fenómeno indiscutible: el efecto psicológico y sociológico que determina el paso del tiempo. Aún los regímenes originados en un hecho de fuerza, pugnante con la legitimidad vigente, crean su propio curso de legitimidad, olvidado su origen.*

*De manera análoga al proceso de curación personal por el olvido, el transcurso del tiempo también obra efectos benéficos en el organismo social, con respecto a las transgresiones, no sólo de obligaciones morales, no siempre fáciles de identificar, especialmente dentro de una sociedad pluralista, sino aún de los más claros deberes jurídicos. En otros términos : en beneficio de la paz social y de la seguridad jurídica, el derecho objetivo no únicamente convalida situaciones que ab initio puedan considerarse censurables en virtud de una perspectiva moral compartida por un gran número de miembros de la comunidad, sino que renuncia a sancionar, transcurrido un tiempo fijado por el legislador, a quien ha incurrido en una conducta inequívocamente delictiva, contenida en una norma cuya capacidad vinculante no está condicionada por la aceptación social o psicológica de que goce. Es el caso de la prescripción de la acción penal y de la pena misma.*

*La prescriptibilidad de la acción penal y de la pena constituyen la regla general, mientras que la excepción que ha venido consolidándose en el ordenamiento internacional está constituida por hechos singularmente graves y repudiables como los crímenes de lesa humanidad (el holocausto judío, por ejemplo) que, precisamente, también por razones no sólo de decencia sino de profilaxis social, no deben olvidarse.*

*Fundamentos análogos a los señalados para la prescripción extintiva (de la que aquí se trata), justifican la prescripción adquisitiva. Lo que en principio es una situación fáctica (aún violenta) no amparada por el derecho, deviene, transcurrido un lapso que el legislador juzga razonable, en interés jurídico digno de protección. La negligencia o aun la indolencia de quienes están habilitados para enmendar, con su acción, la situación o la conducta reprochables, la toma en cuenta el derecho objetivo para construir un derecho subjetivo, con todas las consecuencias que ello implica.*

*La protección de terceros de buena fe frente a situaciones externamente regulares, y cuyo vicio interno no están obligados a conocer, dio lugar, desde la época clásica del derecho romano, a teorías que el derecho occidental moderno ha recogido, e institucionalizado, tales como la doctrina de la apariencia y del error común.*

*La convivencia pacífica, consagrada en el artículo 2 de la Constitución, consecuencia del interés general consignado en el primero, exigen que existan reglas jurídicas claras a las cuales deban someter su conducta las personas que viven en Colombia, y que no subsistan indefinidamente situaciones inciertas generadoras de disputas y litigios sin fin, incompatibles con la seguridad jurídica y, en último término, con el derecho a la paz, que es el eje de toda nuestra normatividad superior.*

*En conclusión, el aparte demandado del artículo 1742 del Código Civil, anterior a la Constitución actual, es armónica con ella y así lo declarará la Corte.*

*En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.*

**RESUELVE:**

*Declarar EXEQUIBLE el aparte acusado del artículo 1742 del Código Civil, que dice..." y en todo caso por prescripción extraordinaria."*

En materia de prescripción, en casos como el que nos ocupa, mediante providencia del 02 de octubre de 2014, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, señaló:

*"... En ese orden de ideas, la Sala encuentra que no puede identificarse el derecho pensional mismo con el acto jurídico de afiliación o traslado a un Régimen, porque es que la afiliación o traslado es el ejercicio de libertad de elección que hace el trabajador bien de pertenecer al régimen e prima media o bien de pertenecer al RAIS, regímenes legalmente reconocidos en nuestra legislación laboral y que si bien en un momento dado para determinados trabajadores afiliarse al RAIS puede ser económicamente desfavorable, no viola, no afecta el núcleo esencial del derecho pensional. Esta sala encuentra desacertada la conclusión a la que llegó la A quo, pues el sistema general de seguridad social integral lo conforman varios subsistemas, el subsistema general de pensiones, el subsistema de salud, el subsistema de riesgos laborales y otros beneficios complementarios. Y es que la seguridad social se rige por principios de universalidad, solidaridad e irrenunciabilidad, pero la imprescriptibilidad es un principio aplicable sólo al derecho pensional propiamente dicho ...*

*En este orden de ideas, esta Corporación considera que contrario a lo señalado por la a quo, la prescripción como excepción previa si está llamada a prosperar, pues en modo alguno se afecta la prestación pensional sino unos factores económicos derivados de la misma como ya dijimos el monto, él persigue que con su traslado a prima media se le reliquide su pensión por efectos del régimen de transición, etc., y se incremente el valor de su mesada pensional. No puede extraerse que con ello se vulnere derecho fundamental alguno al trabajador pensionado. En cuanto al fundamento normativo para estudiar el fenómeno prescripción, como quiera que aquí se discute un asunto entre un usuario del sistema general de seguridad social y la entidad administradora de fondos pensionales, bien podríamos darle aplicación a los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo o al 448 (sic) del código sustantivo del Trabajo que regulan de manera expresa el término para prescribir las acciones- emanadas de los derechos sociales, pero no podemos desconocer que el fundamento fáctico de la controversia que nos convoca es de tipo civil porque tienen relación directa con los elementos del consentimiento, pues se está invocando el error como causal de nulidad y entonces por ello consideramos que en aplicación del artículo-- 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social es viable dar aplicación al artículo 1750 invocado por la parte apelante y contabilizar el término prescriptivo desde el 1º de septiembre de 1994, a la misma fecha, día y mes de 1998 para efectos de prescripción, Entonces, así las cosas encontramos que la acción rescisoria para perseguir la nulidad del acto jurídico de traslado en este caso se encuentra prescrita y como no cabe duda que ese término empezó a contabilizarse el 1º de septiembre de 1994, no tenemos noticia en el expediente de que haya sido objeto de interrupción o de suspensión, entonces debe prosperar como previa... "». El resaltado es nuestro.*

La anterior decisión fue atacada mediante acción de tutela, la cual fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, Corporación que mediante providencia STL4593- 2015, radicación 39718 del 15 de abril de 2015, con ponencia del Magistrado Jorge Mauricio Burgos, no concedió el amparo solicitado al considerar que la decisión controvertida, estaba arraigada en argumentos que consultaron reglas mínimas de razonabilidad jurídica, obedeciendo a la labor hermenéutica propia del juez.

También ha señalado la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral, que el principio de la primacía de la realidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, también resulta aplicable a los Sistemas de Protección Social, así quedó plasmado en la Sentencia SL413-2018, radicación 52704 del 21 de febrero de 2018: *“Debido a esta fuerte conexión que existe entre el respeto a autonomía moral y la dignidad humana, y la garantía de las prestaciones que el sistema consagra, el derecho social es un derecho que se edifica sobre realidades y verdades. Este planteo implica que el principio de la primacía de la realidad sobre las formas consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, tradicionalmente comprendido en el contexto del contrato de trabajo, también permea los actuaciones de los ciudadanos al interior de los sistemas de protección social. De esta forma, la jurisprudencia de la Sala en distintas ocasiones ha dado preeminencia a la intención real del trabajador o afiliado en asuntos relativos al derecho de la seguridad social por encima de las formalidades.*

*Desde luego que, para la tesis que ahora sostiene la Sala, la presencia o no de cotizaciones consistente con el formato de vinculación no es la única expresión de esa voluntad, pueden existir otras, tales como las solicitudes de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves, por mencionar algunos actos de relacionamiento con la entidad que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella. Lo importante es que exista correspondencia entre voluntad y acción, es decir, que la realidad sea un reflejo de lo que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del deseo del trabajador de pertenecer a un régimen pensional determinado...*” Este pronunciamiento aunque referida a una pensión de sobrevivencia, sus argumentos son plenamente aplicables al caso que nos ocupa, pues señala que lo importante es la intención real del afiliado de pertenecer a un determinado régimen pensional. La negrilla y el resaltado son nuestros.

La Corte Constitucional al estudiar una demanda de inexequibilidad y resolver sobre la constitucionalidad, entre otros, del artículo 59 de la Ley 100 de 1993, mediante Sentencia C-086-02 de 13 de febrero de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, indicó:

*“... La Corte Constitucional en sentencia C-538 de 1996 tuvo oportunidad de pronunciarse en torno a la dualidad de regímenes pensionales reconociendo que mediante el sistema regulado en la Ley 100 de 1993, se ejercita y estimula la libre competencia entre los administradores de los regímenes del sector público y el privado, lo cual redundan en beneficio de la eficacia y eficiencia de los servicios de seguridad social. En aquella ocasión además expresó que hacer una igualación de los regímenes puede significar la desaparición de dicha competencia y favorecer a los fondos privados de pensiones en perjuicio del Instituto de Seguros Sociales, aparte de que limitaría las opciones que tienen los destinatarios del servicio para escoger el régimen que más convenga a sus intereses o particulares situaciones.*

*Dijo la Corte: "La Constitución no impone al legislador la creación de un sistema único de pensiones, puede establecer diferentes regímenes para lograr el cometido estatal atinente a la prestación del servicio de seguridad social, que contengan la necesaria protección y asistencia de las referidas personas.*

*"La ley dispuso la creación de un sistema dual, que comprende subsistemas que operan cada uno en forma autónoma e independiente y, además excluyente, lo cual, a juicio de la Corte, se adecua a los, mandatos constitucionales; por lo tanto, no es válido, como lo pretende el demandante, unificar los regímenes en materia de pensión mínima, porque de este modo se iría en contra de la voluntad del legislador, fundada en el consenso político logrado en el Congreso y en los sectores más representativos de la comunidad, en el sentido de consagrar la dualidad de regímenes y que la participación de los particulares en la prestación de seguridad social no excluyera al Instituto de Seguros Sociales.*

*"La dualidad de regímenes, de otra parte, ejercita y estimula como lo quiso el legislador la competencia en el sector público y el privado, lo cual redundaría en beneficio de la eficacia y eficiencia de los servicios de seguridad social. Hacer una igualación de los regímenes, mediante la reducción a uno de dichos sistemas, de lo que concierne a los aspectos básicos de la pensión mínima, esto es, en cuanto a su estructura, financiamiento u operatividad, puede significar la desaparición de dicha competencia y favorecer a los fondos privados de pensiones en perjuicio del Instituto de Seguros Sociales, aparte de que limitaría las opciones que tienen los destinatarios del servicio para escoger el régimen que más convenga a sus intereses o particulares situaciones.*

*"No encuentra la Corte, en consecuencia, que las normas acusadas que hacen parte del universo del sistema de ahorro individual, por sí mismas, esto es, por su contenido material, sean inconstitucionales, como el propio demandante lo acepta. Tampoco halla que sean inconstitucionales, por no obedecer al mismo diseño de las normas sobre pensión mínima del sistema de prima media, particularmente en lo que atañe con la garantía a que alude el art. 138".*

*Aparte de lo anterior, la Corte anotó que no puede existir trato discriminatorio al consagrarse la dualidad de regímenes pensionales pues es el mismo afiliado quien voluntariamente se somete a un régimen o a otro:*

*"No puede hablarse de trato discriminatorio cuando es el mismo afiliado quien voluntariamente se somete a un régimen o a otro; no se impone en consecuencia, un solo régimen."*

*"... la distinta posición en que pueden hallarse los afiliados en uno y otro sistema, que obedece a la consideración de situaciones fácticas y jurídicas diferentes, evaluadas por el legislador no constituye una discriminación prohibida por el Art. 13, porque no puede hablarse de trato discriminatorio cuando es el mismo afiliado quien voluntariamente se somete a un régimen o a otro; no se impone en consecuencia, un solo régimen."*



*De manera, que no puede haber desconocimiento del derecho a la igualdad en el caso de las normas acusadas pues la Ley 100 de 1993 contiene una regulación diferente para cada uno de los regímenes pensionales, apoyada en el principio de la libre elección que permite a los afiliados escoger el subsistema que más se ajuste a sus necesidades, de tal suerte que el futuro pensionado se somete por su propia voluntad a un conjunto de reglas diferentes para uno y otro régimen, y simplemente se hará acreedor a los beneficios y consecuencias que reporte su opción.*

*Así, en el subsistema de prima media con prestación definida los afiliados obtendrán las pensiones establecidas en la ley de un fondo común de naturaleza pública que está constituido por sus aportes y sus rendimientos; al paso que en el subsistema de ahorro individual con solidaridad, la pensión dependerá del ahorro proveniente de las cotizaciones individuales y sus respectivos rendimientos financieros, razón por la cual, su cuantía está determinada por el monto de los aportes realizados, capitalizados en una cuenta de ahorro pensional de cada afiliado.*

*Por las razones anteriores la Corte no encuentra fundamento a las alegaciones del demandante, pues se ha demostrado que la existencia de un régimen dual de pensiones per se lejos de transgredir los principios de igualdad y solidaridad que consagran los artículos 13 y 48 de la Carta, se ajusta a estos valores de la Carta Política. Negrilla ajena al texto.*

*En atención a todo lo expuesto la Corte declarará la exequibilidad de las normas acusadas de la Ley 100 de 1993...”*

La misma Corporación en sentencia C-538/96 del 16 de octubre de 1996, con ponencia del Magistrado Antonio Barrera Carbonell, también refiriéndose a las normas del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, señaló:

## **V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL**

### **1. Planteamiento de los cargos de la demanda.**

*El demandante, en esencia, considera que las normas demandadas son inconstitucionales, bajo la óptica en que las interpreta, porque en materia de garantía de pensión mínima consagran un tratamiento discriminatorio para aquellas personas que escogen el régimen pensional de ahorro individual con solidaridad, frente a las personas que optan por el régimen de prima media con prestación definida, como surge de la comparación de las disposiciones que consagran uno y otro régimen.*

### **2. Análisis de los cargos de la demanda.**

#### **2.1. El sistema dual de pensiones.**

*En el proyecto de ley presentado por el Gobierno al Congreso en el año de 1992, que luego se convirtió en la ley 100 de 1993, se preveía la creación de un nuevo régimen de pensiones cuya estructura básica consistía en un sistema de ahorro individual pensional, inspirado en el modelo chileno, el cual excluía lo referente a salud y a riesgos laborales.*

*Los debates en las cámaras legislativas y la variedad de opiniones expresadas por los diferentes estamentos representativos de la empresa y del trabajo sobre el proyecto del Gobierno, condujeron a que se le diera un viraje sustancial a la concepción del proyecto inicial. En tal virtud, el texto final aprobado por el Congreso, entre otras materias, previó un sistema dual de pensiones: el sistema de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad.*

*En el régimen de prima media con prestación definida los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, invalidez o de sobrevivientes o una indemnización previamente definidas en la ley.*

*En este régimen son aplicables disposiciones vigentes para los sistemas de invalidez, vejez y muerte a cargo del I.S.S. y además las disposiciones sobre las materias contenidas en la ley 100/93 (art. 31).*

*Dicho régimen se caracteriza porque los aportes de los afiliados y empleadores y sus rendimientos integran un fondo común de naturaleza pública, mediante el cual se garantiza el pago de las prestaciones a cargo de los recursos de dicho fondo, los gastos administrativos y las reservas, de acuerdo con la ley.*

*El administrador exclusivo de dicho régimen es el Instituto de Seguros Sociales, pues fue la única entidad que quedó autorizada para continuar afiliando trabajadores en lo sucesivo; por lo tanto, quedó planteada la competitividad entre dicha entidad y los administradores -fondos de pensiones- del sistema de ahorro individual de pensiones.*

*En el sistema de ahorro individual con solidaridad se incorporan y administran recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados. Está basado en los recursos del ahorro, administrados en cuentas de propiedad individual de los afiliados, proveniente de las cotizaciones hechas por los empleadores y trabajadores, más los rendimientos financieros generados por su inversión y, eventualmente, de los subsidios del Estado.*

## **2.2. La situación concreta a decidir.**

*Para responder los cargos de la demanda debe la Corte considerar, si el trato diferenciado relativo a la pensión mínima de vejez, en el sistema de ahorro individual, frente a la pensión mínima de vejez, en el sistema de prima media tiene una justificación objetiva, racional y razonable y proporcionada a la finalidad buscada por el legislador. En tal virtud, la Corte considera:*

*a) Evidentemente al comparar los dos sistemas de pensiones, encuentra la Corte las siguientes diferencias:*

*- Los requisitos para obtener la pensión de vejez en el sistema de prima media (art. 33) son: haber cumplido 55 años de edad si es mujer, o 60 años de edad si es hombre y haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo. El monto mensual de la pensión de vejez se determina así: por las primeras 1000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación; por cada 50 semanas adicionales a las 1000 hasta las 1200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2% llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1200 hasta las 1400, este porcentaje se*



incrementará en 3% en lugar del 2% hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente (art. 34), que no podrá ser inferior al valor del salario mínimo mensual vigente y que tiene la garantía estatal a que alude el art. 138.

- En el sistema de ahorro individual con solidaridad, el derecho a la pensión de vejez, en las diferentes modalidades (renta vitalicia inmediata, retiro programado o retiro programado con renta vitalicia o cualesquiera otras autorizadas) se causa en favor del afiliado a la edad que cada uno de ellos escoge, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual le permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de expedición de la ley, o reajustado según el índice de precios al consumidor, certificado por el DANE, o cuando opte por seguir cotizando, en las circunstancias descritas por el art. 64.

En cuanto a la garantía de pensión mínima de vejez su regulación es la que corresponde al contenido de la norma acusada, según la cual: "Los afiliados que a los sesenta y dos años (62) de edad si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas (1150), tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión".

No obstante, en materia de garantía de pensión mínima, se consagran dos limitaciones: la del art. 83, norma igualmente acusada, según la cual "Para las personas que tienen acceso a las garantías estatales de pensión mínima, tales garantías se pagarán a partir del momento en el cual la anualidad resultante del cálculo de retiro programado sea inferior a doce veces la pensión mínima vigente, o cuando la renta vitalicia a contratar con el capital disponible, sea inferior a la pensión mínima vigente", y la del art. 84 que dice: "Cuando la suma de las pensiones, rentas y remuneraciones que recibe el afiliado o los beneficiarios, según el caso, sea superior a lo que le corresponde como pensión mínima, no habrá lugar a la garantía estatal de pensión mínima".

b) Es evidente, según quedó explicado antes, que el legislador reguló un sistema especial de pensiones, esto es, el de prima media con prestación definida, que era el que tradicionalmente venía operando bajo la administración del Instituto de Seguros Sociales. No optó en consecuencia, por la propuesta inicial del Gobierno en el sentido de que se dejara exclusivamente a las sociedades administradoras de fondos de pensiones, privados u oficiales y del sector solidario, de manejar un único sistema pensional, es decir, el de ahorro individual. En tal virtud, el legislador previó un sistema dual que le permite al afiliado optar libremente por cualquier sistema y para trasladarse de uno a otro.

c) Aun cuando diferentes, con respecto al tratamiento de la pensión mínima, la distinta posición en que pueden hallarse los afiliados en uno y otro sistema, que obedece a la consideración de situaciones fácticas y jurídicas diferentes, evaluadas por el legislador dentro de la libertad que le corresponde para configurar la norma jurídica no constituye una discriminación prohibida por el art. 13, porque no puede hablarse de trato discriminatorio cuando es el mismo afiliado quien voluntariamente se somete a un régimen o a otro; no se impone en consecuencia, un solo régimen. Si bajo un mismo sistema se diera a los afiliados con respecto a la pensión mínima un trato diferente,

sin justificación razonable alguna, obviamente se generaría una desigualdad proscrita constitucionalmente.

d) La libre opción del afiliado para realizar el balance acerca de cuál sistema le conviene más, permite pensar que a éste le corresponde hacer un juicio de valor para determinar, luego de examinadas las ventajas y desventajas de cada sistema en su conjunto, cuál de ellos le conviene más. De este modo, es probable, como lo comprueba la experiencia la posibilidad de opción por uno u otro sistema, según las bondades que en relación con cada de ellos aprecie dicho afiliado.

e) No se requiere que ambos sistemas sean exactamente iguales, para que respondan a la finalidad de asegurar la pensión mínima, lo relevante es que el conjunto de las características y condiciones propias y que operan en cada uno de ellos, guarden la necesaria justificación objetiva y razonable, y constituyan medios que guarden proporcionalidad con la consecución del fin propuesto, o sea, la de asegurar una pensión mínima.

f) Cada sistema, como fórmula creada por el legislador al amparo de su libertad política de creación del derecho, pretende realizar dentro de su universo el cometido atinente al establecimiento y funcionamiento de la seguridad social, con solidaridad, como servicio público de carácter obligatorio, bajo la dirección y responsabilidad del Estado y la participación de los particulares, con miras a atender las prestaciones que se derivan de los riesgos del trabajo y de la necesidad de otorgar a las personas los medios para una subsistencia digna, cuando en razón de la edad ya no disponen de una adecuada capacidad de trabajo.

La prestación del servicio de la Seguridad Social puede estar a cargo del Estado, a través de entidades públicas que asumen diferentes formas jurídicas de gestión o de los particulares, de conformidad con la ley. En consecuencia, el legislador tiene una variedad de opciones para desarrollar el mandato del art. 48, y naturalmente una amplia competencia para crear el sistema o los sistemas de seguridad social que más se adecuen a las finalidades del Estado Social de Derecho y que realicen el postulado no sólo jurídico, sino material de la igualdad, de modo tal que también se garantice plenamente el postulado del art. 46 que asigna a la sociedad y a la familia, pero particularmente al Estado, el deber de concurrir a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad.

La Constitución no impone al legislador la creación de un sistema único de pensiones, puede establecer diferentes regímenes para lograr el cometido estatal atinente a la prestación del servicio de seguridad social, que contengan la necesaria protección y asistencia de las referidas personas.

La ley dispuso la creación de un sistema dual, que comprende subsistemas que operan cada uno en forma autónoma e independiente y, además excluyente, lo cual, a juicio de la Corte, se adecua a los, mandatos constitucionales; por lo tanto, no es válido, como lo pretende el demandante, unificar los regímenes en materia de pensión mínima, porque de este modo se iría en contra de la voluntad del legislador, fundada en el consenso político logrado en el Congreso y en los sectores más representativos de la comunidad, en el sentido de consagrar la dualidad de regímenes y que la participación de los particulares en la prestación de seguridad social no excluyera al Instituto de Seguros Sociales.

*La dualidad de regímenes, de otra parte, ejercita y estimula como lo quiso el legislador la competencia en el sector público y el privado, lo cual redundo en beneficio de la eficacia y eficiencia de los servicios de seguridad social. Hacer una igualación de los regímenes, mediante la reducción a uno de dichos sistemas, de lo que concierne a los aspectos básicos de la pensión mínima, esto es, en cuanto a su estructura, financiamiento u operatividad, puede significar la desaparición de dicha competencia y favorecer a los fondos privados de pensiones en perjuicio del Instituto de Seguros Sociales, aparte de que limitaría las opciones que tienen los destinatarios del servicio para escoger el régimen que más convenga a sus intereses o particulares situaciones.*

*No encuentra la Corte, en consecuencia, que las normas acusadas que hacen parte del universo del sistema de ahorro individual, por si mismas, esto es, por su contenido material, sean inconstitucionales, como el propio demandante lo acepta. Tampoco halla que sean inconstitucionales, por no obedecer al mismo diseño de las normas sobre pensión mínima del sistema de prima media, particularmente en lo que atañe con la garantía a que alude el art. 138.*

*Aceptar el argumento de la actora, so pretexto de proteger el derecho a la igualdad, para declarar una exequibilidad condicionada, como lo sugiere respecto de los arts. 65 y 83, conduce a que la Corte suplante al legislador, en su labor autónoma de creación de las normas jurídicas que rigen cada uno de los dos regímenes de pensiones.*

*Por lo anterior, y por no ser violatorias de las normas invocadas ni de ningún otro precepto de la Constitución, se declararán exequibles las normas demandadas...”* La negrilla es ajena al texto.

## **RAZONES DE LA DEFENSA**

El señor **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**, suscribió solicitud de vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por PROTECCIÓN, como traslado de AFP septiembre de 2009, es decir cuando estaba más que inmerso en la prohibición legal para trasladarse de Régimen, más sin embargo es de anotar que en lugar de solicitar la nulidad de su traslado para esa época prefirió fue cambiar de AFP, decisión que adoptó voluntariamente, en forma libre, espontánea y sin presiones.

La voluntad expresada en el formulario de afiliación, cumpliéndose todos los requisitos señalados en las premisas legales respecto de la selección de los regímenes que integran el Sistema General de Pensiones, evidencian que el ingreso del actor al RAIS, a través de la vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por el Fondo de Pensiones Protección S.A., cumplió las exigencias legales para tal fin y con total ausencia de causales de nulidad (absolutas o relativas).

Adicionalmente, a la parte actora se le hizo reasesoría y nunca hizo uso del derecho de retractarse de la afiliación al Fondo de Pensiones administrado por mí representada, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º. del Decreto 1161 de 1994, manifestando por escrito su decisión en ese sentido en el término concedido por dicha norma, por lo cual quedó válidamente afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Tampoco manifestó su deseo de regresar al ISS, con fundamento en el artículo 1 del decreto 3800 de 2003. Se destaca, que los afiliados al Sistema General de Pensiones fueron advertidos sobre el

derecho consagrado en el artículo 1 del Decreto 3800 de 2003 y la fecha límite para ejercer el mismo, mediante publicaciones en diversos diarios de amplia circulación, que hicieron tanto el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, como las Sociedades Administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Quiere decir lo anterior, que el hecho de que la parte actora hubiera mantenido vigente su afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a través de la vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias por Protección, no obedeció a una conducta arbitraria o caprichosa de la AFP, sino a la falta de manifestación de voluntad del mismo demandante de regresar al ISS hoy Colpensiones - Régimen de Prima Media con Prestación Definida, en los términos de las norma antes señaladas.

Por otra parte y más importante aún es que la parte actora ratificó su decisión de afiliarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, al solicitar la pensión de vejez, aceptar la redención del Bono Pensional y aceptar el reconocimiento de dicha prestación desde junio 1 de 2017, es decir convalidó cualquier falta de información que la parte actora sostiene en su demanda, al suscribir o celebrar un nuevo acto jurídico, el cual está vigente desde que elevó la solicitud de prestación económica y su reconocimiento.

Siendo así las cosas, mí representada en relación con el trámite de vinculación del actor al Fondo de Pensiones Obligatorias que administra y con el reconocimiento de la pensión de vejez, actuó con estricta sujeción a la ley, sin que para ese negocio jurídico, se presentara, ni objeto o causa ilícita, ni la omisión de algún requisito o formalidad que ley de seguridad social prescribe para el valor de los actos de afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, ni vicios del consentimiento; esto es, con total ausencia de “*engaños o imprecisiones*”, por cuanto la parte actora, voluntariamente optó trasladarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, una vez fue ilustrada sobre las características y particularidades de cada régimen y bajo las normas del mismo y sin presión alguna solicitó la pensión de vejez de la cual hoy se encuentra disfrutando.

La decisión de la parte actora de solicitar y aceptar el reconocimiento de pensión de vejez NO puede entenderse de una forma o manera diferente, a una expresa ratificación y convalidación de la demandante de su voluntad de afiliarse al mismo y someterse a sus condiciones.

Ante todo debemos resaltar que las actuaciones de mí representada han estado ceñidas a la ley y por ende no se le puede imputar ningún tipo de pago de perjuicios, amén de que esta pretensión carece de todo sustento legal y fáctico.

Lo cierto es que el demandante suscribió con total conocimiento y voluntariedad tanto su vinculación ante mi representada como la solicitud de reconocimiento de pensión de vejez anticipada, por lo que no se presenta un vicio en el consentimiento que pudiera derivar en una condena por pago de diferencias pensionales ni perjuicios..

Ahora bien, como ya se explicó en los párrafos precedentes, su traslado de Régimen y su vinculación a PROTECCION, fue un acto libre y voluntario de la parte demandante, razón por la cual la parte actora no puede pretender después de más de 25 años, trasladarle a esta Administradora la responsabilidad de una decisión propia, pues recordemos que NUNCA se le obligó o presionó para que se vinculara al RAIS ni para que permaneciera en él, pese a que luego de la asesoría

brindada tuvo la oportunidad de determinar si lo que ofrecía el RAIS – y expresamente señalado en la ley – se acogía a sus intereses pensionales y más aún, cuando ya se encuentra pensionado por la AFP que represento .

También resulta extraño que pretenda el resarcimiento de perjuicios cuando recibe, disfruta y goza de su pensión de vejez, que la solicitó cuando el mismo decidió hacerlo y no presionado por el cumplimiento de los requisitos, como sucede en el RPM.

Luego, si con la presentación de esta demanda pretende el resarcimiento de algún perjuicio aduciendo y pretendiendo el pago de diferencias pensionales, debe entonces demostrar: (i) Que se causó un daño, que de hecho no lo fue en la medida en que actualmente goza de una pensión de vejez, (ii) la ganancia o provecho que ha dejado de reportarse, lo cual, tampoco es existente dado que reiteramos el demandante ha visto incrementado su patrimonio desde el momento en que se le reconoció la pensión de vejez (iii) la actuación u omisión irregular del tercero para causar el daño, que tampoco se configura en la medida en que el demandante decidió de manera libre, voluntaria e informada afiliarse al RAIS, y como ratificación de tal hecho, solicita la pensión de vejez, actos jurídicos que gozan de legalidad y que por tanto desvirtúan la existencia de un daño que a todas éstas, de configurarse en un menor valor de pensión al que hubiere recibido en el RPM, solo es IMPUTABLE al mismo demandante quien decidió como lo acabamos de señalar no solo afiliarse al RAIS sino pensionarse en este régimen.

Es importante anotar que cada Régimen existente dentro del Sistema General de Pensiones tiene sus particularidades y características propias, las cuales son perfectamente explicadas a los afiliados para que ellos escojan la opción que mejor se adapte a sus intereses. Se destaca que el RAIS, es un régimen de creación legal, sin que pueda aceptarse que el mismo Legislador lo haya concebido para afectar, defraudar o desmejorar los intereses pensionales de sus afiliados, siendo avalado por la Corte Constitucional y por ello no puede pretenderse su desmonte por vía judicial.

Por lo anteriormente expuesto solicito que no se declare la pretensión perseguida y se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

### **EXCEPCIONES**

#### **PREVIA**

#### **NO COMPRENDER LA DEMANDA A TODOS LOS LITISCONSORTES NECESARIOS:**

Excepción que se propone, teniendo en cuenta lo siguiente:

#### **MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

La pretensión principal del proceso que nos ocupa es que se declare la ineficacia del traslado de Régimen Pensional del actor y se reconozcan perjuicios morales y patrimoniales además de que reclama indemnización plena de perjuicios.

Al actor se le reconoció la pensión de vejez desde el 1 de junio de 2017 y para su financiación fue necesario la emisión del Bono Pensional por la OBP.



Ahora bien, como dicho Bono Pensional fue redimido para la liquidación de la Pensión de vejez y a pesar de ello está pretendiendo la ineficacia del traslado de Régimen y perjuicios morales y patrimoniales e indemnización plena de perjuicios, en el evento en que se declare la ineficacia del traslado, éste deberá devolver todo lo recibido debidamente indexado, incluyendo el Bono Pensional el cual deberá ser anulado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo tanto este Ministerio debe comparecer al proceso.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público está representado legalmente por Ricardo Bonilla o quien haga sus veces.

En consecuencia, el proceso no comprende a todas las personas que tienen interés directo en el resultado del mismo y sin las cuales es imposible resolver de fondo el asunto que nos ocupa.

#### **DE FONDO**

1. **PRESCRIPCIÓN:** Excepción que oponemos a la totalidad de las pretensiones de la demanda, que se dirigen en contra de mí representada, con base en lo expuesto en el capítulo de **“FUNDAMENTOS DE DERECHO Y RAZONES DE LA DEFENSA”**, medio exceptivo que tiene su sustento en el hecho de que el actor solicita se declare la ineficacia, nulidad e ilegalidad del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad e indemnización de perjuicios, sin considerar que en nuestro ordenamiento jurídico, no existen obligaciones irredimibles y por ello, el Legislador consagró como mecanismo extintivo de derechos y obligaciones, la figura jurídica de la **PRESCRIPCIÓN**, que el Código Civil define así: *"La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo (sic), y concurriendo los demás requisitos legales"*, ocupándose también el Legislador de señalar, el lapso que debe transcurrir para entender que una obligación se encuentra prescrita.

Así las cosas en materia laboral, el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo señala: *“-Regla general. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este Código, prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal de Trabajo o en el presente estatuto.”* (La negrilla es nuestra).

2. **INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO Y FALTA DE CAUSA EN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA:** Excepción que se fundamenta en el hecho de que la afiliación de la parte actora al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, se realizó con el lleno de los requisitos legales y con ausencia de cualquiera de las causales señaladas en la ley, como motivos de ineficacia, **TENIENDO EN CUENTA QUE LA PARTE ACTORA POR VOLUNTAD PROPIA SE AFILIO Y ESCOGIO EL RAIS PARA PENSIONARSE**, por lo cual no existe ninguna causal legal para que se acceda a declarar la ineficacia pretendida en la demanda.

3. **VALIDEZ DE LA AFILIACION DE LA PARTE ACTORA AL RAIS:** Excepción que oponemos a la totalidad de las pretensiones de la demanda, con base en lo expuesto en el acápite de “*FUNDAMENTOS DE DERECHO Y RAZONES DE LA DEFENSA*” y que se fundamenta en el hecho de que la vinculación del actor al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., se realizó con el lleno de los requisitos señalados en los artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y 11 del decreto 692 de 1994, **INCLUIDO EL CONSENTIMIENTO DE LA PARTE ACTORA.**
4. **INEXISTENCIA DE PAGO O RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS:** Excepción que se propone en virtud de que al afiliarse al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por PROTECCION, se le brindó la información suficiente respecto del acto jurídico realizado, lo que implica que la decisión de trasladarse de fondo de pensiones realizado por la parte actora, obedeció al libre ejercicio de su derecho de trasladarse de régimen y que tenía pleno conocimiento de las normas que lo regulan entre ellas, la forma de liquidarse la pensión. y si alguna situación adversa se deriva de dicho acto, sólo a él es imputable.  
  
De todos modos, la pretensión encaminada a que se reconozcan a la parte actora perjuicios, carece de todo sustento legal y fáctico, por cuanto no está prevista dentro del Régimen de Seguridad Social – Sistema General de Pensiones, el cual consagra las prestaciones específicas que deben ser satisfechas al cumplimiento de todos cada uno de los requisitos exigidos de manera expresa y además no puede predicarse que se han ocasionado perjuicios sobre algo no demostrable, pues hasta la fecha el demandante ha incrementado su patrimonio mientras ha estado afiliado al RAIS.
5. **COMPENSACIÓN:** Sin implicar confesión o aceptación de los hechos de la demanda o allanamiento a sus pretensiones, se propone esta excepción, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 306 del C.P.C., aplicable por analogía al procedimiento laboral, pues al habersele reconocido la pensión de vejez, el demandante deberá devolver debidamente indexado todo lo recibido por mesadas pensionales incluyendo el valor del Bono Pensional emitido por la OBP.
6. **BUENA FE DE LA ENTIDAD DEMANDADA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** Excepción que fundamenta en el hecho de que mi representada, ha actuado en cumplimiento del principio de buena fe, que le imponen la constitución y las leyes, sin incurrir en ninguna conducta contraria a derecho tanto en la afiliación de la actora como en la información que se le suministró.
7. **INNOMINADA o GENÉRICA:** Excepción que se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 306 del C.P.C., aplicable por analogía al procedimiento laboral, que indica: “*Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.*”



## **MEDIOS DE PRUEBA**

### **DOCUMENTAL**

Téngase como prueba en su valor legal los siguientes documentos:

1. Copia formulario de vinculación a SANTANDER hoy PROTECCION
2. Copia historial de vinculaciones SIAFP
3. Copia solicitud de prestación económica pensión de vejez
4. Copia notificación reconocimiento pensión de vejez
5. Copia comunicación elección modalidad de pensión
6. Copia constancia calidad de pensionado del demandante emitida por PROTECCION
7. Copia constancia mesadas pensionales pagadas al demandante
8. Copia Respuesta de fecha 9 de octubre de 2023 al Derecho de Petición elevado por el demandante

### **INTERROGATORIO DE PARTE**

Sírvase Señora Juez hacer comparecer a su Despacho en la fecha que estime conveniente al señor **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**, en su calidad de demandante, para que bajo la gravedad de juramento absuelva interrogatorio de parte, que en forma verbal o en sobre cerrado le formularé el día de la audiencia fijada para tal fin.

### **ANEXOS**

Los documentos relacionados en el acápite de medios de prueba.  
Copia poder a mí conferido y de mi Tarjeta Profesional

### **NOTIFICACIONES**

Demandante: La misma que aparece en la demanda.  
Demandado: Calle 49 N° 63-100 piso 9, Medellín.  
Apoderada: Las recibiré en su despacho o en mi oficina ubicada en la Carrera 5 No. 10-63  
Oficina 718 de esta ciudad de Cali.  
Celular: 3104580010 - 3218160821  
Correo electrónico [mariaezu@gmail.com](mailto:mariaezu@gmail.com) – [mzuniga.abogados@gmail.com](mailto:mzuniga.abogados@gmail.com)

Respetuosamente,



**Dirección: Carrera 5ª. No. 10-63 Oficina 718 – Celular 310-4580010- 321-8160821**  
**E-mail: [mariaezu@gmail.com](mailto:mariaezu@gmail.com) - [mzuniga.abogados@gmail.com](mailto:mzuniga.abogados@gmail.com) – Santiago de Cali**

**MARIA ELIZABETH ZUÑIGA**  
**C.C.41.599.079 de Bogotá**  
**T.P. 64.937 C.S. de la J.**

**MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES SAS**  
*Abogados Especialistas en Derecho Laboral*

Santiago de Cali, 12 de febrero de 2024

Señor

**JUEZ CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI**  
**E. S. D.**

**Referencia: PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**  
**DEMANDANTE: LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**  
**DEMANDADO: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y**  
**CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., Y COLPENSIONES**  
**RADICACION: 2023-00576**  
**ASUNTO: DEMANDA DE RECONVENCIÓN**

**María Elizabeth Zúñiga**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 41.599.079 de Bogotá, abogada, con T.P. 64.937 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al artículo 77 del Código General del Proceso, aplicable por analogía al procedimiento laboral, haciendo uso del poder conferido por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía **PROTECCIÓN S.A.**, que obra en autos, con domicilio principal en la ciudad de Medellín en la Calle 49 N° 63-100 piso 9, presento **DEMANDA DE RECONVENCIÓN**, en contra del señor **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**, ciudadano en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.287.568, con correo electrónico según la demanda: [sanchezacevedoluisarlos@gmail.com](mailto:sanchezacevedoluisarlos@gmail.com), para que previos los trámites de un proceso ordinario laboral de primera instancia, en sentencia ejecutoriada que haga tránsito a cosa juzgada, se hagan a favor de mí representada y en contra del señor **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**, las siguientes:

**DECLARACIONES Y CONDENAS**

Que en el evento remoto de que se acceda a declarar la NULIDAD O INEFICACIA del traslado del señor **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO** al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y en consecuencia se llegara a ordenar a la AFP **PROTECCIÓN** a trasladar a **COLPENSIONES**, todos los aportes y rendimientos que existan en la cuenta individual de ahorro pensional, incluyendo las mesadas pensionales y el valor del bono pensional, se debe **CONDENAR** al aquí demandado en reconvención, a:

- a. **A REINTEGRAR** a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía **PROTECCIÓN S.A.**, las sumas de dinero debidamente indexadas que se le han venido cancelado al señor **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**, por concepto de mesadas pensionales derivadas de la pensión de vejez a partir de la fecha del reconocimiento del derecho es decir desde el 1 de junio de 2017, hasta la ejecutoria de

***Dirección: Carrera 5 No. 10-63 Oficina 718 – Edificio Colseguros***  
***E-mail: [mariaezu@gmail.com](mailto:mariaezu@gmail.com) - Celular 310-4580010 y 321-8160821 - Cali***

**MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES SAS**  
*Abogados Especialistas en Derecho Laboral*

la sentencia que ponga fin al proceso.

- b. A **ASUMIR** cualquier disminución del valor que llegue a sufrir el capital de la cuenta individual de ahorro pensional, por concepto de pago de mesadas pensionales o cualquier otro rubro.
- c. A **REINTEGRAR** a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía **PROTECCIÓN S.A.**, los recursos provenientes del bono pensional destinados al pago de la pensión de vejez, asumiendo la parte demandada aquí en reconvención, cualquier disminución del valor que llegare a sufrir dicho título o cualquier actualización que de su valor llegue a ordenarse.
- d. Las sumas de dinero que resulten probadas por los conceptos antes mencionados, deberán cancelarse debidamente indexadas.
- e. Que se condene ultra y extra petita.

Las anteriores pretensiones, se fundan en los siguientes

**HECHOS**

**PRIMERO.** El señor **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**, solicitó vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por **PROTECCIÓN S.A.**, el 29 de septiembre de 2009, es decir cuando estaba más que inmerso en la prohibición legal para trasladarse de Régimen Pensional.

**SEGUNDO.** El señor **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**, ha instaurado demanda contra Colpensiones, contra la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA COLFONDOS** y la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.**, solicitando entre otras pretensiones, declarar la INEFICACIA de su traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad realizado a través de COLFONDOS, así como también indemnización plena de perjuicios, perjuicios morales y patrimoniales, intereses moratorios y retroactivo.

**TERCERO: PROTECCION** en cumplimiento de la normatividad legal, al demandante se le realizaron proyecciones pensionales y se le realizó la asesoría y reasesoría oportunamente.

**CUARTO:** El señor **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**, no ejerció el derecho de trasladarse o regresar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, antes de cumplirse el plazo para adoptar dicha decisión, y por el contrario, solicitó la PENSION DE VEJEZ la cual le fue reconocida desde el 1 de junio de 2017 con el concurso de la Nación a través de la OBP.

**Dirección: Carrera 5 No. 10-63 Oficina 718 – Edificio Colseguros**  
**E-mail: [mariaezu@gmail.com](mailto:mariaezu@gmail.com) - Celular 310-4580010 y 321-8160821 - Cali**

**MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES SAS**  
*Abogados Especialistas en Derecho Laboral*

**QUINTO.** La pensión de vejez que disfruta la parte actora fue reconocida a partir del 1 de junio de 2017.

**SEXTO.** El derecho de traslado o selección de régimen, es exclusivo de los afiliados al Sistema General de Pensiones, sin que la AFP PROTECCIÓN pudiera ejercer dicha prerrogativa en nombre o en representación del señor **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO** para lograr su regreso al Régimen de Prima Media antes de encontrarse inmerso en la prohibición legal del traslado por edad.

### **PRUEBAS**

Solicito se decreten a favor de la demandante, **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION S.A.**, los siguientes medios de prueba.

❖ **INTERROGATORIO DE PARTE:** Que en forma personal deberá absolver el demandado, **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**, en la audiencia que para tal efecto señale el despacho, interrogatorio que formularé en forma oral o mediante sobre cerrado.

❖ **DOCUMENTALES:** Solicito se tengan como prueba documental, los aportados con la contestación de la demanda principal que aparecen relacionados en el acápite de **MEDIOS DE PRUEBAS – DOCUMENTAL** del referido escrito.

### **PROCESO**

Ordinario Laboral de Primera Instancia.

### **COMPETENCIA**

La competencia es suya Señora Juez por tramitarse dentro del mismo proceso.

### **FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO**

La demanda de reconvención tiene su fundamento en las normas que se señalan a continuación: Artículos 75 y 76 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que regulan lo relacionado con la demanda de reconvención, el artículo 77 del Código General de Proceso, aplicable por analogía al Procedimiento Laboral, que regula las facultades del apoderado, el artículo 1746 del Código Civil que regula los efectos relacionados con la declaración de nulidad, esto es, que las cosas se retrocen al momento inicial de la celebración del contrato, debiendo restituir las partes mutuamente, las contribuciones o prestaciones que recibieron y demás normas concordantes y aplicables al caso que nos ocupa.

***Dirección: Carrera 5 No. 10-63 Oficina 718 – Edificio Colseguros***  
***E-mail: [mariaezu@gmail.com](mailto:mariaezu@gmail.com) - Celular 310-4580010 y 321-8160821 - Cali***

***MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES SAS***  
***Abogados Especialistas en Derecho Laboral***

**NOTIFICACIONES**

Demandante: Calle 49 N° 63-100 piso 9, Medellín, correo electrónico: [accioneslegales@protección.com](mailto:accioneslegales@protección.com)

Demandado en reconvención: Tal como aparece en la demanda presentada por el demandado en reconvención contra PROTECCION Y COLPENSIONES: [sanchezacevedoluisarlos@gmail.com](mailto:sanchezacevedoluisarlos@gmail.com)

Apoderado parte actora: [procesos@tiradoescobar.com](mailto:procesos@tiradoescobar.com)

Apoderada suscrita: Las recibiré en su despacho o en mi oficina ubicada en la Carrera 5 No. 10-63 Oficina 718 de esta ciudad de Cali, correo electrónico: [mariaezu@gmail.com](mailto:mariaezu@gmail.com) y [mznuniga.abogados@gmail.com](mailto:mznuniga.abogados@gmail.com)

Del señor Juez respetuosamente,



**MARIA ELIZABETH ZUÑIGA**

T.P. 64.937 C.S. de la J.

***Dirección: Carrera 5 No. 10-63 Oficina 718 – Edificio Colseguros***  
***E-mail: [mariaezu@gmail.com](mailto:mariaezu@gmail.com) - Celular 310-4580010 y 321-8160821 - Cali***



**MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES SAS**  
*Abogados Especialistas en Derecho Laboral*

Santiago de Cali, 12 de febrero de 2024

Señor

**JUEZ CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI**  
**E. S. D.**

**Referencia: PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**  
**DEMANDANTE: LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**  
**DEMANDADO: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y**  
**CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., Y COLPENSIONES**  
**RADICACION: 2023-00576**  
**ASUNTO: DEMANDA DE RECONVENCIÓN**

**María Elizabeth Zúñiga**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 41.599.079 de Bogotá, abogada, con T.P. 64.937 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al artículo 77 del Código General del Proceso, aplicable por analogía al procedimiento laboral, haciendo uso del poder conferido por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía **PROTECCIÓN S.A.**, que obra en autos, con domicilio principal en la ciudad de Medellín en la Calle 49 N° 63-100 piso 9, presento **DEMANDA DE RECONVENCIÓN**, en contra del señor **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**, ciudadano en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.287.568, con correo electrónico según la demanda: [sanchezacevedoluisarlos@gmail.com](mailto:sanchezacevedoluisarlos@gmail.com), para que previos los trámites de un proceso ordinario laboral de primera instancia, en sentencia ejecutoriada que haga tránsito a cosa juzgada, se hagan a favor de mí representada y en contra del señor **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**, las siguientes:

**DECLARACIONES Y CONDENAS**

Que en el evento remoto de que se acceda a declarar la NULIDAD O INEFICACIA del traslado del señor **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO** al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y en consecuencia se llegara a ordenar a la AFP **PROTECCIÓN** a trasladar a **COLPENSIONES**, todos los aportes y rendimientos que existan en la cuenta individual de ahorro pensional, incluyendo las mesadas pensionales y el valor del bono pensional, se debe **CONDENAR** al aquí demandado en reconvención, a:

- a. **A REINTEGRAR** a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía **PROTECCIÓN S.A.**, las sumas de dinero debidamente indexadas que se le han venido cancelado al señor **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**, por concepto de mesadas pensionales derivadas de la pensión de vejez a partir de la fecha del reconocimiento del derecho es decir desde el 1 de junio de 2017, hasta la ejecutoria de

***Dirección: Carrera 5 No. 10-63 Oficina 718 – Edificio Colseguros***  
***E-mail: [mariaezu@gmail.com](mailto:mariaezu@gmail.com) - Celular 310-4580010 y 321-8160821 - Cali***

**MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES SAS**  
*Abogados Especialistas en Derecho Laboral*

la sentencia que ponga fin al proceso.

- b. A **ASUMIR** cualquier disminución del valor que llegue a sufrir el capital de la cuenta individual de ahorro pensional, por concepto de pago de mesadas pensionales o cualquier otro rubro.
- c. A **REINTEGRAR** a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía **PROTECCIÓN S.A.**, los recursos provenientes del bono pensional destinados al pago de la pensión de vejez, asumiendo la parte demandada aquí en reconvención, cualquier disminución del valor que llegue a sufrir dicho título o cualquier actualización que de su valor llegue a ordenarse.
- d. Las sumas de dinero que resulten probadas por los conceptos antes mencionados, deberán cancelarse debidamente indexadas.
- e. Que se condene ultra y extra petita.

Las anteriores pretensiones, se fundan en los siguientes

**HECHOS**

**PRIMERO.** El señor **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**, solicitó vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por **PROTECCIÓN S.A.**, el 29 de septiembre de 2009, es decir cuando estaba más que inmerso en la prohibición legal para trasladarse de Régimen Pensional.

**SEGUNDO.** El señor **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**, ha instaurado demanda contra Colpensiones, contra la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA COLFONDOS** y la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.**, solicitando entre otras pretensiones, declarar la INEFICACIA de su traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad realizado a través de COLFONDOS, así como también indemnización plena de perjuicios, perjuicios morales y patrimoniales, intereses moratorios y retroactivo.

**TERCERO: PROTECCION** en cumplimiento de la normatividad legal, al demandante se le realizaron proyecciones pensionales y se le realizó la asesoría y reasesoría oportunamente.

**CUARTO:** El señor **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**, no ejerció el derecho de trasladarse o regresar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, antes de cumplirse el plazo para adoptar dicha decisión, y por el contrario, solicitó la PENSION DE VEJEZ la cual le fue reconocida desde el 1 de junio de 2017 con el concurso de la Nación a través de la OBP.

**Dirección: Carrera 5 No. 10-63 Oficina 718 – Edificio Colseguros**  
**E-mail: [mariaezu@gmail.com](mailto:mariaezu@gmail.com) - Celular 310-4580010 y 321-8160821 - Cali**

**MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES SAS**  
*Abogados Especialistas en Derecho Laboral*

**QUINTO.** La pensión de vejez que disfruta la parte actora fue reconocida a partir del 1 de junio de 2017.

**SEXTO.** El derecho de traslado o selección de régimen, es exclusivo de los afiliados al Sistema General de Pensiones, sin que la AFP PROTECCIÓN pudiera ejercer dicha prerrogativa en nombre o en representación del señor **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO** para lograr su regreso al Régimen de Prima Media antes de encontrarse inmerso en la prohibición legal del traslado por edad.

### **PRUEBAS**

Solicito se decreten a favor de la demandante, **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION S.A.**, los siguientes medios de prueba.

❖ **INTERROGATORIO DE PARTE:** Que en forma personal deberá absolver el demandado, **LUIS CARLOS SANCHEZ ACEVEDO**, en la audiencia que para tal efecto señale el despacho, interrogatorio que formularé en forma oral o mediante sobre cerrado.

❖ **DOCUMENTALES:** Solicito se tengan como prueba documental, los aportados con la contestación de la demanda principal que aparecen relacionados en el acápite de **MEDIOS DE PRUEBAS – DOCUMENTAL** del referido escrito.

### **PROCESO**

Ordinario Laboral de Primera Instancia.

### **COMPETENCIA**

La competencia es suya Señora Juez por tramitarse dentro del mismo proceso.

### **FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO**

La demanda de reconvención tiene su fundamento en las normas que se señalan a continuación: Artículos 75 y 76 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que regulan lo relacionado con la demanda de reconvención, el artículo 77 del Código General de Proceso, aplicable por analogía al Procedimiento Laboral, que regula las facultades del apoderado, el artículo 1746 del Código Civil que regula los efectos relacionados con la declaración de nulidad, esto es, que las cosas se retrocen al momento inicial de la celebración del contrato, debiendo restituir las partes mutuamente, las contribuciones o prestaciones que recibieron y demás normas concordantes y aplicables al caso que nos ocupa.

***Dirección: Carrera 5 No. 10-63 Oficina 718 – Edificio Colseguros***  
***E-mail: [mariaezu@gmail.com](mailto:mariaezu@gmail.com) - Celular 310-4580010 y 321-8160821 - Cali***

***MARIA ELIZABETH ZUÑIGA ABOGADOS CONSULTORES SAS***  
***Abogados Especialistas en Derecho Laboral***

**NOTIFICACIONES**

Demandante: Calle 49 N° 63-100 piso 9, Medellín, correo electrónico: [accioneslegales@protección.com](mailto:accioneslegales@protección.com)

Demandado en reconvención: Tal como aparece en la demanda presentada por el demandado en reconvención contra PROTECCION Y COLPENSIONES: [sanchezacevedoluisarlos@gmail.com](mailto:sanchezacevedoluisarlos@gmail.com)

Apoderado parte actora: [procesos@tiradoescobar.com](mailto:procesos@tiradoescobar.com)

Apoderada suscrita: Las recibiré en su despacho o en mi oficina ubicada en la Carrera 5 No. 10-63 Oficina 718 de esta ciudad de Cali, correo electrónico: [mariaezu@gmail.com](mailto:mariaezu@gmail.com) y [mznuniga.abogados@gmail.com](mailto:mznuniga.abogados@gmail.com)

Del señor Juez respetuosamente,



**MARIA ELIZABETH ZUÑIGA**

T.P. 64.937 C.S. de la J.

***Dirección: Carrera 5 No. 10-63 Oficina 718 – Edificio Colseguros***  
***E-mail: [mariaezu@gmail.com](mailto:mariaezu@gmail.com) - Celular 310-4580010 y 321-8160821 - Cali***